ASAMBLEA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
Trámite Legislativo
2024 - 2029

Código AN_SG_10
Versión 0
Fecha de versión 7-may-2024

		PERIODO LEGISLATIVO	2026 - 2027
Anteproyecto de Ley N°		Proyecto de Ley N°	705
Ley N°		Gaceta Oficial	
Etapa	PENDIENTE DE II DEBATE		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación	07-sep-26	Comisión	COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS
Título	QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS AL TEXTO ÚNICO DE LA LEY 6 DE 3 DE FEBRERO DE 1997 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.		
Proponente:	S.E. JUAN CARLOS ORILLAC URRUTIA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA		

DEBATES

Fecha de Prohijamiento	
Fecha de I Debate	22-sep-26
Fecha de II Debate	
Fecha de III Debate	

Observaciones:	

PROYECTO DE LEY Nº0705
COMISIÒN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÒMICOS.

ASAMBLEA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
Presentación 7/9/26
Hora 5:29
A Debate

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de Ley introduce modificaciones puntuales al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que en el corto plazo permiten fortalecer el marco regulatorio del servicio público de electricidad y mejorar diversos aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio público de electricidad.

Este servicio público constituye un pilar esencial para el desarrollo económico, social y productivo del país. Su prestación eficiente, continua e ininterrumpida no solo representa una exigencia técnica y operativa, sino también una obligación jurídica derivada del artículo 49 de la Constitución Política de la República de Panamá, el cual impone al Estado el deber de garantizar a todas las personas el acceso a bienes y servicios de calidad.

Durante las últimas décadas, los clientes del servicio público de electricidad han manifestado de forma reiterada preocupaciones relacionadas con la calidad del suministro eléctrico, debido a su desmejoramiento sistemático. Entre las principales incidencias reportadas destacan las fluctuaciones de voltaje, interrupciones frecuentes del servicio, daños a equipos y artefactos eléctricos, así como deficiencias en los mecanismos de atención, compensación y resarcimiento económico. Estas situaciones impactan de manera directa la economía de los hogares, la actividad comercial e industrial, y la confianza de los ciudadanos en la adecuada prestación del servicio.

En atención a esta realidad, el presente proyecto de Ley refuerza el régimen de derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando disposiciones orientadas a garantizar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes, plazos definidos para la atención de reclamos, reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras conforme a las normas reglamentarias vigentes y herramientas regulatorias que permitan una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora. Estas medidas procuran equilibrar la relación entre prestadores y usuarios, fortaleciendo la protección del consumidor dentro del sector eléctrico.

Asimismo, la iniciativa legislativa amplía y precisa las obligaciones de las empresas de distribución eléctrica, incorporando elementos esenciales para la modernización del sistema, tales como la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión. Dichas adecuaciones responden a la evolución tecnológica del sector y a la necesidad de garantizar sistemas eléctricos mas resilientes, eficientes y adaptados a los desafíos presentes y futuros.

Un componente relevante de la propuesta normativa lo constituye la electrificación rural promoviendo el objetivo de acceso universal al servicio de electricidad, la expansión ordenada y sostenible de la cobertura eléctrica. En este sentido, la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas se incluye como una obligación inherente a la actividad de distribución, ampliando su alcance. De igual manera, se introducen ajustes regulatorios que permiten reconocer estas inversiones dentro de la estructura de costos del sector, asegurando señales económicas adecuadas que viabilicen su ejecución. Estas disposiciones reflejan el compromiso del Estado con la equidad territorial, el desarrollo inclusivo y la reducción de brechas sociales.

Por otra parte, el proyecto de Ley atiende consideraciones fundamentales en materia de competencia y estructura del mercado eléctrico para preservar condiciones de competencia efectiva, garantizando un entorno equilibrado, transparente y orientado al interés público.

Igualmente, la propuesta incorpora mecanismos que fomentan una competencia real y efectiva en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica. La experiencia histórica ha evidenciado vacíos regulatorios que limitan la dinámica competitiva en dichos procesos, lo que puede incidir negativamente en la eficiencia del mercado y en los incentivos de desempeño empresarial. En este contexto, se establecen reglas que fortalecen la transparencia, la racionalidad económica y la competencia, alineando estos procesos con principios de mercado y protección del interés nacional.

Se introducen ajustes en el régimen sancionatorio y en las facultades de la autoridad reguladora, a fin de robustecer la eficacia del sistema de fiscalización y cumplimiento normativo, entre otros, con la ampliación de las facultades de cobro coactivo contemplada en el Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, para procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final.

Las modificaciones propuestas contribuyen al cumplimiento de los objetivos de política pública del Estado panameño en materia energética, particularmente aquellos orientados a las metas de ampliación de la cobertura eléctrica y acceso universal, fortalecimiento de la calidad del servicio y la modernización del sistema eléctrico que facilite la incorporación de nuevas tecnologías y la descarbonización de la matriz energética de Panamá.

PROYECTO DE LEY Nº0705
COMISIÒN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÒMICOS.

ASAMBLEA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
Presentación 7/9/26
Hora 5:29
A Debate
A Votación

PROYECTO DE LEY N°____
De de de 2026

Que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Se adiciona el artículo 4-A al Texto Único de la Ley 6 de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020, así:

Artículo 4-A. Garantía de la continuidad del servicio. Para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad, durante el tiempo que le tome corregir la falta, o mientras se rescinda o se dé la resolución administrativa del contrato o la terminación de la licencia correspondiente.

Para tal fin, se designará un interventor y la remuneración de este interventor será sufragada por el propio prestador del servicio. Este interventor quedará inhabilitado para mantener vínculos comerciales y/o profesionales con la empresa objeto de la intervención, sus filiales o grupo económico, por un periodo de dos (2) años.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará lo concerniente a la designación del interventor y al proceso de intervención aquí establecido.

Artículo 2. Se adicionan los numerales 29, 30, 31 y 32 al artículo 6 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020, así:

Artículo 6. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

…

29. *Idoneidad Técnica:* Es el estado y funcionamiento efectivo de los activos destinados a la prestación del servicio público de electricidad, de forma regular y continua, dentro de los niveles de calidad establecidos en la zona de concesión, y conforme a las normas que apliquen.
30. *Interventor*: Profesional con experiencia en temas del sector eléctrico, con amplias facultades para administrar, supervisar y gestionar las operaciones de la empresa, a fin de garantizar, de esta manera, la continuidad eficiente e ininterrumpida del servicio público objeto de la concesión o licencia.
31. *Paquete Mayoritario.* Es el bloque no menor del 51% de la totalidad de acciones emitidas, cuyo propietario o propietarios ejercen el control de la empresa de distribución.
32. *Valor Justo de Mercado.* Es el valor de mercado del Paquete Mayoritario de las acciones de las empresas de distribución, que cada quince años se somete al proceso de venta.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Este valor será determinado a través de un procedimiento establecido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 3. Se adicionan los numerales 15 y 16 al artículo 12 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020, así:

Artículo 12. Deberes y obligaciones. Los prestadores del servicio público de electricidad tendrán los siguientes deberes y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan otras disposiciones legales:

...

15. Facilitar la transparencia de la información en el mercado eléctrico, tomando en cuenta el interés público, la integridad y funcionamiento eficiente de dicho mercado, la competencia económica y la protección de los clientes.
16. Implementar, por parte de las empresas distribuidoras y de transmisión, los mecanismos centralizados y accesibles al público para consultas sobre la capacidad de sus redes. Las distribuidoras y la empresa de transmisión deberán disponer, en su página web, de un sistema de información que permita observar el estado de la red y las características técnicas básicas de los puntos de conexión que incluyan ubicación, características técnicas de la red, capacidad nominal de la subestación, transformador o red, y la disponibilidad para la conexión a la red.

Artículo 4. El artículo 48 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 48. Concesión para distribución. Los contratos de concesión para distribución tendrán un término de quince (15) años. Antes de vencerse ese término, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos convocará a un proceso competitivo de concurrencia, de acuerdo con lo establecido en esta ley, para la venta del Paquete Mayoritario de las empresas de distribución. Como parte este proceso competitivo de concurrencia y como lo establece esta ley, habrá una instancia de precalificación, cuyo Pliego de Precalificación deberá ser aprobado por el Consejo de Gabinete, proceso de precalificación al cual deberán concurrir todas las empresas o consorcios que estén interesados en participar en el proceso competitivo de concurrencia.

Las bases de precalificación y el pliego de cargos deberán establecer requisitos, condiciones y criterios de evaluación uniformes para todos los participantes, entre ellos aquellos relativos a su experiencia, capacidad técnica, financiera y operativa, además del grado de cumplimiento de obligaciones en concesiones otorgadas o título habilitante equivalente que le hayan sido otorgado.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Sólo aquellos que hubieren participado en la instancia de precalificación y cumplido con los requisitos establecidos en sus bases podrán presentar propuestas con base al pliego de cargos que especificarán los requisitos mínimos exigidos que deberán cumplir para participar en el proceso competitivo de concurrencia.

El Titular del Paquete Mayoritario, de haber precalificado, podrá presentar su oferta en el acto público de presentación de propuestas y, si su oferta fuere mayor o igual al precio más alto ofrecido por otros participantes, conservará la propiedad del Paquete Mayoritario. Por el contrario, si hubiere otro precio mayor, el Paquete Mayoritario será adjudicado al mejor oferente. En cualquiera de los dos casos, se otorgará una nueva concesión por otros quince (15) años.

Este mismo procedimiento competitivo se seguirá en el caso de terminación anticipada de la concesión por cualquier causa establecida en la presente ley o en el contrato de concesión.

En caso de terminación anticipada de la concesión, el Titular del Paquete Mayoritario no podrá participar directa o indirectamente, en el proceso competitivo.

Artículo 5. Se adiciona el artículo 48-A al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020, así:

Artículo 48-A. *Importe a pagar por la venta del Paquete Mayoritario.* Para determinar el importe a pagar por la venta se aplicará lo siguiente:

1. Si el ganador del proceso competitivo de concurrencia es el Titular del Paquete Mayoritario, éste entregará al Tesoro Nacional un pago en concepto de beneficio por el derecho de concesión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los literales siguientes.

Este monto de dinero a entregar al Tesoro Nacional aplicará cuando en el proceso de venta del Paquete Mayoritario participe sólo su Titular, o cuando, además de este, se reciban, una o más ofertas válidas adicionales. En cualquiera de estos casos, el cálculo se realizará de la siguiente manera:

a. Si la oferta del Titular del Paquete Mayoritario es al menos diez por ciento (10%) superior al Valor Justo de Mercado, y no existe una segunda oferta superior al Valor Justo de Mercado, el pago al Tesoro Nacional corresponderá al cien por ciento (100%) del diferencial entre el valor total ofertado por el Titular del Paquete Mayoritario y el Valor Justo de Mercado; o
b. Si la oferta del Titular del Paquete Mayoritario es al menos diez por ciento (10%) superior al Valor Justo del Mercado, y la segunda oferta más alta supera el Valor Justo de Mercado, el pago al Tesoro Nacional corresponderá al cien por ciento (100%) del

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

diferencial entre el valor total ofertado por el Titular del Paquete Mayoritario de las acciones y el valor total de la segunda oferta más alta; o

c. Si la oferta del Titular del Paquete Mayoritario es la más alta y a la vez menor que el Valor Justo de Mercado más el diez por ciento (10%), no habrá abono al Tesoro Nacional.

2. Si el ganador del proceso competitivo de concurrencia no es el Titular del Paquete Mayoritario, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos entregará el importe por la venta a quien sea el Titular hasta ese momento.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará este artículo, así como el procedimiento para determinar el Valor Justo de Mercado del Paquete Mayoritario y su aplicación en el proceso de venta de estas.

Artículo 6. El artículo 49 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 49. *Terminación.* El contrato de concesión terminará:

1. Por el vencimiento del término contractual.
2. Por declaración de quiebra, concurso de acreedores, disolución o suspensión de pagos del concesionario.
3. Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la presente ley o las derivadas del contrato.
4. Por incumplimiento reiterado en la ejecución de las obras o instalaciones comprendidas en el programa de inversiones, de acuerdo con la presente ley, el contrato de concesión y las reglamentaciones emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
5. Por el incumplimiento reiterado de la obligación de electrificación rural en las áreas rurales no servidas no rentables y no concesionadas, de acuerdo con la presente ley, el contrato de concesión y las reglamentaciones emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
6. Por incumplimiento reiterado de alguno o todos los indicadores de calidad del servicio establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
7. Si durante el periodo de la concesión la suma acumulada de las reducciones tarifarias, penalizaciones y multas aplicadas al concesionario por el incumplimiento de normativas vigentes y del contrato, supera el veinticinco por ciento (25%) del ingreso total anual facturado por el servicio público de distribución en el año inmediatamente anterior al momento de la evaluación.
8. Por cualquiera otra causa establecida en el contrato.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Artículo 7. El numeral 7 de artículo 57 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 57. Obligaciones de los generadores. Los generadores están obligados a:

...

7. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal, abuso de una posición dominante en el mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia.

Artículo 8. El artículo 59 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 59. Restricciones. Las empresas de generación que presten el servicio público de electricidad y sus propietarios estarán sometidos a las siguientes restricciones:

1. Participar, directa o indirectamente, en el control de las empresas de distribución; y
2. Solicitar nuevas licencias y/o concesiones si, al hacerlo, atienden, directa o indirectamente, a través de otras empresas de generación u otros medios, más del treinta por ciento (30 %) del consumo de electricidad del mercado nacional. Este límite aplicará también a las adquisiciones de licencias y/o concesiones mediante fusiones, cesiones, absorciones o cualquier otro mecanismo, quedando su autorización supeditada a la verificación del porcentaje antes mencionado por parte de dicha Autoridad. El porcentaje referido en el presente numeral no aplicará para solicitudes de nuevas licencias destinadas exclusivamente a atender el abastecimiento de grandes suministros tales como Centro de Datos y otros. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecerá el procedimiento para la aplicación de este numeral.

El Órgano Ejecutivo podrá aumentar el porcentaje señalado en el numeral 2 del presente artículo, previa solicitud de la Autoridad sustentada en un informe debidamente motivado, cuando las condiciones de competencia en el mercado eléctrico lo justifiquen.

Artículo 9. El artículo 78 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 78. Alcance. El servicio de distribución comprende las actividades de compra de energía en bloque, el transporte de la energía por las redes de distribución, la entrega de la energía a los clientes finales y la comercialización de energía a los clientes.

El servicio de distribución comprende, además, la obligación de ejecutar proyectos de electrificación rural en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas que sean definidos por la Oficina de Electrificación Rural en conjunto con la Secretaría Nacional de Energía y aprobados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el proceso de revisión tarifaria.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Los proyectos de electrificación rural que ejecuten las empresas de distribución producirán la expansión automática de la zona de concesión del distribuidor que los ejecute.

Artículo 10. El artículo 80 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 80: *Obligaciones*. Las empresas distribuidoras tendrán las siguientes obligaciones:

1. Dar servicio a quien lo solicite en la zona mínima de concesión, sea que el cliente esté ubicado en esta zona o bien que se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros. Se exceptúa el caso de los grandes clientes que no hayan cumplido con los requisitos de demanda y aviso previo, que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establezca o que esté establecido en el respectivo contrato de concesión.
2. Extender la cobertura del servicio a las áreas rurales o con población dispersa dentro de su zona de concesión, conforme a lo dispuesto en el respectivo contrato de concesión.
3. Ejecutar las obras o instalaciones comprendidas en el programa de inversiones aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
4. Realizar sus actividades conforme a las disposiciones establecidas en esta ley y su contrato de concesión, prestando el servicio de distribución con los niveles de calidad que determinen la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, disponiendo para tal fin la utilización efectiva de los recursos asignados para la operación y mantenimiento que aseguren una adecuada conservación de la Idoneidad Técnica de la red de distribución eléctrica.
5. Proceder a la ampliación de las redes de distribución, cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro eléctrico y para cumplir con la obligación de electrificación rural de las áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas.
6. Cumplir con las normas y procedimientos aplicables para la compra de energía en bloque establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y para la operación integrada establecidas en el Reglamento de Operación.
7. Publicar los cuadros tarifarios aplicables ubicados en su zona de concesión y cobrar las tarifas aprobadas, de conformidad a las disposiciones establecidas en esta ley, su reglamento y las resoluciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
8. Realizar las inversiones que se requieran para la prestación eficiente del servicio conforme con los niveles de calidad establecidos, y para la implementación de redes inteligentes.
9. Medir los consumos reales de los clientes mediante instrumentos tecnológicos apropiados dentro de los plazos y términos que fije la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. De tener la empresa de distribución la necesidad de estimar el consumo del cliente sólo

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

se admitirán el máximo de facturas estimadas que establezca la reglamentación emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

10. Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos en sus redes de forma que cumpla con la normativa vigente en materia de seguridad.
11. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal, abuso de una posición dominante en el mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia.
12. Atender las solicitudes de nuevos suministros en los plazos y términos establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos,
13. Entregar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos toda la información que éste le solicite en tiempo oportuno.
14. Destinar los montos correspondientes a los incumplimientos en los límites de calidad establecidos en la normativa vigente, dentro del plazo determinado en la resolución emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
15. Pagar al Tesoro Nacional el valor de las multas que resulten de la aplicación de la Cláusula Penal del Contrato de Concesión. Dichas multas podrán ascender hasta veinte millones de balboas (B/.20,000,000.00), dependiendo de la gravedad de la infracción, su reincidencia o el grado de incumplimiento del contrato. Cada contrato de concesión establecerá expresamente las causales que dan lugar a multa y los montos correspondientes.

Artículo 11. El artículo 82 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 82. Compras de energía en bloque por empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras contratarán el suministro de energía y/o potencia mediante actos de concurrencia que realizarán en forma conjunta o individual, prepararán los pliegos de cargos y efectuarán la convocatoria de los actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía, así como la evaluación y adjudicación de los contratos de suministro correspondientes, de acuerdo con los parámetros, criterios y procedimientos establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Una vez las empresas distribuidoras cuenten con la no objeción de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos a la adjudicación, procederán a la firma de los contratos de suministro resultantes. Estos contratos de suministro de energía y/o potencia no requieren del refrendo de la Contraloría General de la República para su perfeccionamiento.

Parágrafo transitorio. Este artículo comenzará a regir a partir del 22 de octubre de 2028.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Asesoría de Asuntos Jurídicos

Artículo 12. El artículo 83 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 83. Pliego de cargos especiales. Las empresas distribuidoras deberán realizar actos de concurrencia de compra de potencia y/o energía con pliegos de cargos especiales en forma conjunta o individual, aprobados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Dichos pliegos de cargos estarán sujetos a las directrices de política energética dictadas por la Secretaría Nacional de Energía. En los pliegos de cargos especiales se podrá fijar un precio de referencia para la contratación y podrán establecer condiciones específicas de compra.

Parágrafo transitorio. Este artículo comenzará a regir a partir del 22 de octubre de 2028.

Artículo 13. El artículo 85 del Texto Único de la Ley 6 de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 85. Restricciones: Las empresas distribuidoras y sus propietarios estarán sometidos a las siguientes restricciones en la prestación del servicio:

1. Participar, directa o indirectamente, en el control de plantas de generación, cuando la capacidad agregada equivalente exceda el 15% de la demanda atendida en su zona de concesión.
2. Solicitar nuevas concesiones si, al hacerlo, atienden, directa o indirectamente, a través del control accionario de otras empresas de distribución u otros medios, más del 50 % del número de clientes en el mercado nacional.

   La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá autorizar que se exceda este porcentaje cuando a su juicio sea necesario para:

   a. Permitir la expansión de la concesión a la zona de influencia,
   b. Permitir la expansión del sistema eléctrico del país,
   c. Facilitar una mayor competencia en la Venta del Paquete Mayoritario de las Acciones,
   d. Mejorar la calidad de servicio de las empresas de distribución.

   Para la aplicación de los literales c y d de este artículo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, durante el proceso de venta del Paquete Mayoritario de las Acciones, establecerá cuáles empresas distribuidoras o sus propietarios podrán solicitar nuevas concesiones de distribución.
3. Durante los primeros cinco años de vigencia de esta Ley, generar energía y comprar energía a otras empresas diferentes a la Empresa de Transmisión, cuando la capacidad de generación agregada equivalente exceda el 15% de la demanda atendida en su zona de concesión. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá autorizar que se exceda este límite temporalmente, cuando a su juicio sea necesario para atender circunstancias imprevistas o cuando a su juicio ello represente beneficio económico para los clientes.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

4. Privilegiar a empresas afines, filiales, subsidiaras o relacionadas con cualquier tipo de información relacionada a la actividad de distribución. Cuando las empresas de distribución o sus propietarios tengan empresas filiales o subsidiarias que se dediquen a actividades no restringidas en el artículo 52 de esta Ley, no deberán hacer uso o entrega de información privilegiada o de sus clientes a la que pudiesen tener acceso en virtud del negocio de distribución. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará el procedimiento que deberán seguir las empresas para garantizar que dichas empresas afines, filiales, subsidiaras o relacionadas no hagan uso de información privilegiada.

Artículo 14. Se adiciona el artículo 86- A al Texto Único de la Ley 6 de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 así:

Artículo 86-A. Los proyectos de Electrificación rural que ejecuten las empresas de distribución de conformidad con esta ley, deberán considerarse en su totalidad como parte de los activos de las empresas distribuidoras en el cálculo del valor agregado de distribución.

Artículo 15. El artículo 98 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 98. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cuatro años a partir de su entrada en vigencia. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo que lesionan injustamente los intereses de los clientes o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. Vencido su periodo de vigencia, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no defina las nuevas.

Para tal efecto, no se considerarán grave error de cálculo las variaciones en las ventas ocasionadas por la suspensión del servicio eléctrico producto de la morosidad en la tasa de aseo.

Artículo 16. El artículo 99 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 99. Cobertura de costos. Las tarifas asociadas con el acceso y uso de las redes de transmisión cubrirán los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento de la red nacional de transmisión necesarios para atender el crecimiento previsto de la demanda, en condiciones adecuadas de calidad y confiabilidad y de desarrollo sostenible. Los costos se calcularán bajo el supuesto de eficiencia económica en el desarrollo el plan de expansión y en

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

la gestión de la Empresa de Transmisión. Para los efectos de este cálculo, no se considerarán los costos financieros de créditos concedidos al concesionario.

Los costos utilizados como base para el cálculo de tarifas deben permitir a la Empresa de Transmisión tener una tasa razonable de rentabilidad, antes de aplicarse el impuesto sobre la renta, sobre el activo fijo neto invertido a costo original. Para efectos de este cálculo, se define como tasa razonable de rentabilidad aquella que calcule la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos que no difiera en más de dos puntos de la suma de la tasa de interés anual efectiva, promedio de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se fija la fórmula tarifaria, de los bonos de treinta años del tesoro de los Estados Unidos de América, más una prima de seis (6) puntos en concepto del riesgo del negocio de transmisión en el país.

Artículo 17. El artículo 101 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 101. Valor agregado de distribución. El valor agregado de distribución está constituido por los siguientes costos que tendría una empresa de distribución eficiente, para prestar el servicio de distribución en su zona de concesión: costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de distribución, excluyendo los costos de medición, facturación y atención a los clientes; el costo de las pérdidas estándar en las redes de distribución; el costo de depreciación de sus bienes; y el costo correspondiente a la oportunidad que debe tener el concesionario de obtener una tasa razonable de rentabilidad, antes de aplicarse el impuesto sobre la renta, sobre sus inversiones. Para los efectos de este cálculo, no se considerarán los costos financieros de créditos concedidos al concesionario.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecerá un máximo de seis áreas de distribución, representativas de los mercados atendidos en cada zona de concesión; y calculará, luego, el valor agregado de distribución para cada área representativa, bajo el supuesto de eficiencia en la gestión de la empresa de distribución. El supuesto de eficiencia tendrá como base el desempeño reciente de empresas reales similares, nacionales o extranjeras.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos definirá la tasa de rentabilidad que considere razonable para el concesionario, tomando en cuenta la eficiencia de éste. la calidad de su servicio, su programa de inversiones para el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias y cualquier otro factor que considere relevante, que no difiera en más de dos puntos de la suma de la tasa de interés anual efectiva, promedio de los doce meses inmediatos anteriores a la fecha en que se fija la fórmula tarifaria, de los bonos de treinta años del tesoro de los Estados Unidos de América, más una prima de siete (7) puntos en concepto del riesgo del negocio de distribución en el país.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

La tasa así determinada se aplicará a los activos fijos netos en operación que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos estime para el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias. Esta estimación se hará a partir del valor, a costo original, asentado en los libros de contabilidad del concesionario, al inicio del periodo, bajo el supuesto de eficiencia económica en las inversiones que el concesionario haga durante el periodo.

Artículo 18. El artículo 110 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 110. Costo reconocido por compra en bloque. Las compras de electricidad por parte de las empresas distribuidoras deberán garantizar, mediante contratos de suministro, derivados de actos de concurrencia, el servicio a los clientes atendidos directamente por ellas, por el término y las condiciones que establezca su contrato de concesión o, en su defecto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Las compras de energía realizadas a través de actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía se remunerarán por medio de tarifas que reflejen los costos económicos de suministro y que cubran, en promedio, todos los costos de energía, potencia, servicios especiales y demás cargos en que se incurra por concepto de las compras de energía a empresas generadoras contratadas, según los procedimientos establecidos en el Capítulo IV y VI del Título III de esta ley.

El costo reconocido por las compras para el suministro eléctrico para los clientes finales de las empresas distribuidoras también reconocerá de la misma manera indicada en el párrafo anterior, las compras de las empresas distribuidoras en el mercado ocasional que hayan sido autorizadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

En caso de que la empresa distribuidora contrate el suministro de energía en bloque a través de medios distintos a los actos de compra de potencia y/o energía, autorizados por ley, se le asignará a este contrato, para efectos tarifarios, un costo calculado con base en el precio promedio de las compras de energía través de actos de compra de potencia y/o energía de dicha distribuidora de acuerdo con el procedimiento que autorice la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 19. Se adiciona el numeral 15 al artículo 113 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 así:

Artículo 113. Derechos. Todas las personas, naturales o jurídicas, públicas y privadas, podrán tener acceso al servicio de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, sus reglamentos, las resoluciones y disposiciones aplicables. Sin perjuicio de lo contemplado en otras disposiciones legales, los clientes de estos servicios tienen derecho a:

...

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

15. Que se apliquen los créditos en su factura cuando se vea afectado por el incumplimiento en los niveles de calidad establecidos en la normativa vigente, dentro del plazo determinado en la resolución emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, una vez esta haya quedado ejecutoriada.

Artículo 20. El artículo 125 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020 queda así:

Artículo 125. Obligatoriedad de pago. Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, estará exenta del pago correspondiente por los servicios de electricidad que reciba.

Los clientes que se encuentren al día en el pago del servicio de electricidad conforme a la reglamentación vigente y que presenten reclamos por inconsistencia de facturación o alto consumo podrán abstenerse del pago de la porción en reclamo hasta tanto la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos lo resuelva.

Las empresas distribuidoras dispondrán de un plazo no mayor de quince días (15), contado a partir de la fecha de presentación de un reclamo, para resolverlo. Vencido este plazo sin que la empresa distribuidora resuelva el reclamo, se entenderá a favor del cliente.

Si el cliente no se encuentra satisfecho con la respuesta obtenida de su reclamo ante la empresa distribuidora, cuenta con treinta días calendario para presentar su reclamo ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 21. Se adicionan los numerales 11 y 12 al artículo 150 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 ordenado por la Ley 194 de 2020, así:

Artículo 150. Infracciones. Constituyen infracciones a lo establecido en esta Ley, por parte de los prestadores o de los clientes, además de las contempladas expresamente en otras disposiciones de esta Ley, las siguientes:

...

11. Incurrir de forma reiterada en la no entrega de información, a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en los tiempos y formas que le sean solicitados.
12. Cuando el distribuidor del servicio de electricidad incurra en una de las conductas o infracciones descritas en la Cláusula Penal de los Contratos de Concesión.

Artículo 22. El artículo 151 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, así:

Artículo 151. Sanciones a los prestadores del servicio. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos impondrá a quienes cometan algunas de las infracciones señaladas en esta Ley o en los Contratos de Concesión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes, según la naturaleza y la gravedad de la falta, las siguientes sanciones:

1. Amonestación

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

2. Multas de mil balboas (B/.1,000.00) hasta veinte millones de balboas (B/.20,000.000.00)
3. Multas reiterativas de cien balboas (B/.100.00) a diez mil balboas (B/.10, 000.00) por día, cuando no den cumplimiento a una orden impartida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. En este caso la multa se causará por día hasta que se dé cumplimiento a la orden impartida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos fijará el monto de la multa tomando en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, el grado de perturbación y alteración de los servicios, así como, la cuantía del daño o perjuicio ocasionado. La sanción se impondrá sin perjuicio de la resolución administrativa del contrato de concesión o de la cancelación de la licencia, en los casos que esto proceda.

El monto de las multas que se impongan a los prestadores del servicio por la comisión de alguna de las infracciones establecidas en los numerales del 1 al 11 del artículo 150 del Título VII sobre Infracciones, Sanciones y Procedimiento Sancionador, se repartirá en beneficio de los clientes a través de las tarifas en un periodo que no excederá de los sesenta días calendario. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecerá el procedimiento para hacerlo efectivo.

Las multas que se impongan a las empresas distribuidoras como consecuencia de las conductas o infracciones descritas en la Cláusula Penal de los Contratos de Concesión serán pagadas al Tesoro Nacional.

Artículo 23. El artículo 30 del Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996 queda así:

Artículo 30. Impugnaciones. Las Resoluciones de la Autoridad podrán ser impugnadas por cualquier persona natural o jurídica, o por los órganos competentes del Estado, cuando demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus intereses legítimos o en sus derechos; interponiendo los recursos de reconsideración y/o apelación, según corresponda, ante la propia Autoridad, con lo cual se agotará la vía gubernativa.

Los recursos serán concedidos en efecto suspensivo excepto, cuando correspondan a resoluciones que estén relacionadas al resarcimiento económico por:

a. Una deficiente prestación del servicio; o
b. Reducciones tarifarias por calidad de servicio;

Las Resoluciones del Administrador, serán únicamente objeto del recurso de reconsideración ante el propio Administrador, luego de lo cual se agotará la vía gubernativa.

Las Resoluciones de los directores nacionales pueden ser impugnadas mediante los recursos de reconsideración y de apelación. Es potestad del afectado hacer uso directamente del recurso de apelación ante el Administrador, luego de lo cual se agotará la vía gubernativa.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Las Resoluciones del director ejecutivo únicamente serán objeto del recurso de apelación ante el Administrador, luego de lo cual se agotará la vía gubernativa. La Autoridad tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para decidir el recurso de reconsideración o apelación respectivo.

Artículo 24. El artículo 32 del Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996 queda así:

Artículo 32. Cobro Coactivo. Se confiere a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el ejercicio del cobro coactivo para la ejecución y recuperación de sus créditos, específicamente los referentes a la Tasa de control, vigilancia y fiscalización, las multas que imponga de conformidad con la presente Ley y las leyes sectoriales, aplicando para ello lo dispuesto en las normas de procesos ejecutivos del Código Judicial. Las certificaciones expedidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sobre el monto de las deudas de los agentes, operadores o concesionarios prestarán mérito ejecutivo. De igual forma prestarán mérito ejecutivo las resoluciones en firme, que impongan las multas pertinentes.

Además, se confiere el ejercicio del cobro coactivo a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en los procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final.

El incumplimiento de lo ordenado mediante resolución ejecutoriada emitida en los procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final, generará un recargo mensual equivalente al dos por ciento (2%) del monto adeudado, por cada mes o fracción de mes de atraso. Este recargo será liquidado de pleno derecho por el Juez Ejecutor, se incorporará al crédito exigible y se cobrará mediante el mismo procedimiento coactivo.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos designará a un funcionario como Juez Ejecutor, quien deberá ser abogado idóneo y será responsable de adelantar los respectivos procedimientos de cobro coactivo.

Artículo 25. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 6 de 1997, que contendrá todas las reformas que se le han efectuado hasta la fecha, las disposiciones de la presente Ley, así como toda modificación previa a su publicación.

La numeración de los artículos en este texto único iniciará por el artículo 1.

Además, para su elaboración, se considerarán los siguientes aspectos:

1. La realización de los ajustes correspondientes a las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 6 de 1997.
2. La introducción de todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria.
3. La realización de los ajustes formales y estructurales del texto único de la Ley 6 de 1997, de acuerdo con la técnica legislativa, incluyendo el cambio de Ente Regulador por Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
4. Una vez elaborado el Texto Único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la Gaceta Oficial.

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

Artículo 26. La presente Ley modifica los artículos 6, 12, 48, 49, 57, 59, 78, 80, 82, 83, 85, 98, 99, 101, 110, 113, 125, 150 y 151 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, ordenado por la Ley 194 de 2020 y modifica los artículos 30 y 32 del Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996 adicionada y modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, adoptado por el Decreto Ejecutivo No. 143 de 29 de septiembre de 2006, y adiciona el artículo 4-A, 48-A y 86-A al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, ordenado por la Ley 194 de 2020.

Artículo 27. Esta Ley entrará en vigencia el día siguiente de su promulgación, salvo aquellas disposiciones en las que se haya previsto una vigencia diferente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ____ de _____de 2026, por el suscrito, **S.E. JUAN CARLOS ORILLAC URRUTIA**, ministro de la Presidencia, en virtud de autorización expedida mediante Resolución de Gabinete N° 71 de 4 de agosto de 2026.

JUAN CARLOS ORILLAC URRUTIA
Ministro

Ministerio de la Presidencia
VERIFICADO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

ASAMBLEA NACIONAL
Secretaría General
Presentación 7/10/26
Hora 5:53
A Debate
A Votación

ASAMBLEA NACIONAL
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS

Informe de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 705, Que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones.

Panamá, 06 de octubre de 2026.

Honorable Diputada
SHIRLEY CASTAÑEDAS
Presidenta
Asamblea Nacional
E. S. D.

Señora Presidenta:

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 134 y concordantes del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir presenta el informe de Primer debate del Proyecto de Ley No.705, **Que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones.**

I. ANTECEDENTES

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 7 de septiembre de 2026, por S.E. Juan Carlos Orillac, Ministro de la Presidencia.

II. OBJETIVOS

1. Fortalecer y modernizar el marco regulatorio del servicio público de electricidad en Panamá, mediante reformas a la Ley 6 de 1997, con énfasis en la calidad y continuidad del servicio, protección de los usuarios, fiscalización efectiva, inversión y modernización de las redes, electrificación rural y competencia en el mercado eléctrico.
2. Mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico, creando mecanismos que permitan a la ASEP intervenir cuando resulte necesario para garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
3. Defender los derechos y la protección de los usuarios, especialmente frente a fluctuaciones de voltaje, interrupciones, deficiencias de calidad, daños y problemas de facturación.

III. CONSULTAS

Como parte del proceso de consultas del Proyecto de Ley No. 705, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos recibió observaciones, emisiones de concepto y propuestas de instituciones públicas, empresas del sector eléctrico, organizaciones de consumidores, gremios, firmas de abogados y usuarios, a saber: Secretaria Nacional de Energía, ENSA (Elektra Noreste, S.A.), PANAM (Pan-Am Generating Limited), SITIESPA (Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá), SIP (Sindicato de Industriales de Panamá), ETESA (Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.), Ministerio de Ambiente, ANPAG (Asociación Panameña de Generadores Eléctricos), APEDE (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa), Usuarios independientes, AGRANDEL (Asociación de Grandes Clientes Eléctricos), Morgan &Morgan, Comité de Defensa de los Servicios Públicos y la Universidad Tecnológica de Panamá, donde las mismas fueron puestas a disposición de los comisionados para su consideración durante el Primer debate.

IV. DEL PRIMER DEBATE

A. Sesión de 22 de septiembre de 2026

El día 22 de septiembre de 2026, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, cuarto piso del Edificio Nuevo del Palacio Justo Arosemena, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos abrió la discusión en Primer Debate del **Proyecto de Ley No.705, Que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones,** sesión que fue presidida por el Honorable Diputado Jamis Acosta Guerra.

La sesión inició con el quórum reglamentario, donde estuvieron presentes los comisionados: Jamis Acosta Guerra, actuando como presidente; Julio De la Guardia, como secretario; Néstor Guardia Jaén, José Luis Varela, Jorge González López, Yamireliz Chong; también se contó con la participación de los diputados suplentes debidamente habilitados Marta Sandoya Barsallo, Luis Charris Abrego y Kevin Carrillo.

En dicha sesión participaron representantes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Secretaría Nacional de Energía, Elektra Noreste, S.A. (ENSA), AES Panamá, Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES), Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia; Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA); ENFRAGEN; Morgan & Morgan; Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA); Galindo, Arias y López (GALA); Panamá Legal Group, entre otros.

Seguidamente, el presidente de la Comisión, Jamis Acosta Guerra, indicó al secretario que diera lectura al orden del día, el cual fue aprobado por todos los comisionados. Consecutivamente, se dio lectura a la correspondencia donde constaba nota del Ministerio de la Presidencia designando al licenciado Rodrigo Rodríguez Jaramillo, Secretario Nacional de

Energía para asistir en representación del ministro Juan Carlos Orillac y de manera conjunta con funcionarios y asesores del Ejecutivo y de la Autoridad reguladora.

El diputado Jamis Acosta, presidente de la comisión, presentó una propuesta de Resolución N° 1, destinada a fijar la metodología de participación, discusión y análisis del proyecto en mención, sin embargo, la misma fue retirada, luego de una breve discusión.

Continuando con el debate, el presidente de la comisión, H.D. Jamis Acosta, cedió la palabra a la comisionada H.D. Yamireliz Chong, quien señaló oportuno presentar una propuesta para suspender el debate del proyecto de ley No.705 y alterar el orden del día para que se adicionara en el punto 3, el prohijamiento del Anteproyecto de Ley No.181, presentado por su bancada, donde planteó que ambas iniciativas buscan modificaciones a la misma norma sustantiva y abordan de manera directa la regulación y fiscalización del sector eléctrico nacional, a su vez, consideró que ambas iniciativas debían ser discutidas y unificadas conforme a la práctica parlamentaria de las comisiones de la Asamblea Nacional. Mencionó que, una reforma de esta magnitud exige un debate profundo, amplio y participativo, donde se escuche a todos los sectores técnicos y especialistas en la materia, por lo que sugirió que las mismas se analizaran en una mesa técnica.

Una vez concluida la participación de la comisionada Chong, el presidente procedió a cederle la palabra al comisionado José Luis Varela, quien manifestó que no tenía ningún inconveniente en dar su aprobación para el prohijamiento del Anteproyecto No.181. Sin embargo, resaltó que, en la comisión hay varias iniciativas legislativas bajo la misma temática, como lo son: el Anteproyecto de ley No. 78, presentado por el diputado Ricardo Vigil; el Anteproyecto de ley No. 110, presentado por el diputado Manuel Samaniego, pendientes de prohijamiento; el proyecto de ley No. 557 presentado por el diputado Medin Jiménez y el proyecto de ley No.670, presentado por el diputado Jairo Salazar.

La diputada Yamireliz Chong y otros, procedieron a presentar una propuesta para suspender lo que se discutía y alterar el orden del día para discutir el prohijamiento del Anteproyecto No.181, la cual fue aprobada por mayoría.

Una vez concluido el prohijamiento, se votó para levantar la suspensión del Primer debate del Proyecto de Ley No.705, el cual fue aprobado y se procedió con la lectura de forma íntegra del Proyecto de Ley No.705.

Finalizada la lectura del proyecto de ley, se otorgó la palabra al Dr. Rodrigo Rodríguez Jaramillo, Secretario Nacional de Energía, quien explicó que la iniciativa se orienta a las necesidades de los usuarios, especialmente la calidad, continuidad y costo del suministro. Describió modificaciones relacionadas con el incumplimiento de los indicadores de calidad, el reconocimiento oportuno de créditos a favor de clientes y las herramientas de la ASEP frente a prestadores que no cumplan sus obligaciones. Expuso también, la revisión de las condiciones de participación en el proceso competitivo relativo al paquete accionario mayoritario de las distribuidoras y el régimen aplicable a generadores, incluida la propuesta

de ajustar el parámetro de concentración y extenderlo a licencias, además de concesiones. Finalmente, destacó la electrificación rural. Indicó que la OER conservaría funciones y que el proyecto busca imponer a las distribuidoras responsabilidades de inversión, operación y mantenimiento en determinadas áreas no servidas, no rentables y no concesionadas.

Finalizada la intervención del Secretario de energía, la Comisión se declaró en sesión permanente hasta agotar los puntos del orden del día, con seis votos a favor y tres abstenciones.

Continuando con la discusión el Presidente de la Comisión procedió a llamar a la lista de oradores que se anotaron para participar en el primer debate, por lo que cedió la palabra al señor Edgar Ivankovich, en representación de AES Panamá, quien manifiestó sus observaciones al artículo 8, restricciones a la generación, informó que la empresa había remitido observaciones escritas y concentró su intervención en ese artículo que plantea modificar el artículo 59 de la Ley 6 de 1997. Expresó que el texto propuesto contempla un umbral de 30 % referido al consumo de electricidad del mercado nacional para solicitudes de nuevas licencias o concesiones y otras operaciones. Solicitó estudiar una redacción que utilizara la capacidad instalada como parámetro, en lugar del consumo o la energía efectivamente atendida. Aclaró que su propuesta no se dirigía a cuestionar el 30 % en sí, sino la magnitud sobre la que se calcularía. Como sustento de su postura, mencionó la participación de numerosos oferentes en licitaciones recientes y argumentó que conservar la competencia contribuye a obtener precios contractuales competitivos.

El comisionado José Luis Varela, le consultó al representante de AES Panamá que les explicara en términos accesibles el límite vigente referido a concesiones y consumo de energía, la incorporación propuesta de licencias y el efecto concreto que podría tener el nuevo artículo en licitaciones futuras. El representante de AES, respondió que la legislación vigente establece un límite del 25% del consumo eléctrico nacional para solicitar nuevas concesiones de generación, sin extender expresamente dicha restricción a las licencias correspondientes como la solar, eólica y térmica. El artículo 8 del proyecto de ley propone elevar el límite al 30% e incorporar licencias, lo que, a juicio de la empresa, podría restringir su participación en nuevos proyectos de generación y afectar la concurrencia de oferentes en futuras licitaciones de suministro eléctrico.

En este mismo orden, el presidente de la comisión, diputado Jamis Acosta, le otorgó la palabra al señor Antonio Clement de la Oficina de Electrificación Rural (OER), adscrita al Ministerio de la Presidencia, el cual solicitó analizar una mayor disponibilidad operativa de los recursos destinados a electrificación rural, incluidos los aportes contemplados en el régimen sectorial. Diferenció la extensión de redes desde puntos existentes de interconexión de los sistemas solares aislados para comunidades remotas. En relación con estos últimos, planteó mecanismos comunitarios para organizar el cuidado, mantenimiento y pago del servicio, pues advirtió sobre el deterioro de instalaciones entregadas sin una estructura de sostenibilidad. Expresó las reservas sobre trasladar a las distribuidoras responsabilidades en

las áreas no rentables sin definir claramente los recursos, la supervisión y la continuidad de las funciones sociales de la OER. La rentabilidad y el cuidado de las instalaciones debían tratarse de forma expresa y explicó la práctica de entrega de redes a las distribuidoras para su administración.

La comisionada Yamireliz Chong, le preguntó al representante de la OER, sobre la distinción de competencias y efecto tarifario. Solicitó diferenciar los proyectos ejecutados por la OER de aquellos que, según el Proyecto 705, quedarían a cargo de las distribuidoras. Observó que la iniciativa no preveía suprimir la OER y planteó que, antes de crear nuevas obligaciones, debía precisarse la inversión exigible, las áreas a cubrir, los plazos y la incidencia prevista en la tarifa. En este sentido, el Dr. Rodrigo Rodríguez Jaramillo de SNE, intervino y expresó sobre el alcance de la reforma rural y respuesta tarifaria. Aclaró que el proyecto no propone eliminar la OER y que el propósito es complementar sus labores mediante nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras. Indicó que estas asumirían, según los proyectos aprobados, instalación, operación y mantenimiento, incluidos los sistemas aislados cuando corresponda.

Consecutivamente, el comisionado Julio De la Guardia, solicitó una explicación ampliada sobre el umbral del 30%, el límite vigente y el propuesto, en atención a los efectos tarifarios alegados por AES. A partir de esa consulta se concedió la palabra al Ing. Jorge Billingslea, Director Nacional de Electricidad de la ASEP, donde señaló que, conforme a su interpretación del texto propuesto, las empresas podrían seguir participando en licitaciones con las instalaciones existentes, aun cuando el umbral pudiera limitar nuevas licencias o concesiones. Distinguió entre el número de empresas que concurren al mercado y el tamaño de sus participaciones efectivas. El ingeniero Billingslea explicó que la finalidad regulatoria era prevenir una concentración que pudiera facilitar el ejercicio de poder de mercado. Mencionó, como datos de su exposición, una participación aproximada de AES del 33 % del consumo nacional, una participación del siguiente agente cercano al 15 % y participaciones menores para otros agentes.

El licenciado Edgar Ivankovich, de AES Panamá, da respuesta al planteamiento de ASEP, señalando que no comparten que la participación de AES pudiera asociarse, sin mayor análisis, a una distorsión de precios. Alegó que los contratos adjudicados establecen precios que deben respetarse y que el despacho económico puede elevar la cantidad de energía efectivamente suministrada por plantas que ofrecen costos menores. Reiteró su interpretación de que un límite medido sobre el consumo podría restringir nuevas inversiones del grupo y, en su opinión, reducir la competencia en futuras licitaciones. A preguntas de los diputados, distinguió la contratación a plazo del mercado ocasional y sostuvo que la contratación suficiente de la distribución contribuye a limitar la exposición a variaciones de este último.

La diputada Yamireliz Chong, hizo mención sobre el artículo 59 propuesto en el proyecto de ley, y planteó sobre la diferencia entre el consumo eléctrico nacional y la capacidad instalada. El señor Edgar Ivankovich explicó que la capacidad instalada es la suma de las capacidades

de las unidades de generación y aportó cifras aproximadas sobre la capacidad del sistema y la de AES de Panamá.

El Dr. Rodrigo Rodríguez Jaramillo, Secretario Nacional de Energía, explicó que el Ejecutivo mantiene el criterio de consumo que ya figura en el régimen de concesiones y propone extenderlo a las licencias con un umbral revisado. Señaló que la participación en el despacho y en los contratos no se evalúa exclusivamente por capacidad instalada y que la concentración requiere considerar sus posibles efectos en el mercado. Aclaró que la propuesta no pretende afectar retroactivamente los contratos ni las instalaciones existentes.

El H.D. José Luis Varela consultó a los especialistas sobre la distribución de los costos del sistema eléctrico entre usuarios con paneles solares y usuarios que dependen íntegramente de la red, especialmente cuando quienes generan durante el día también utilizan la red durante la noche.

El Doctor Rodrigo Rodríguez Jaramillo, expresó que el esquema de medición neta es una compensación de energía inyectada y consumida durante el periodo de facturación. Indicó que, a su juicio, cuando el autoconsumo se expande, pueden presentarse transferencias de costos de la red entre grupos de usuarios que conviene estudiar.

Finalizada la intervención anterior, el presidente de la Comisión, H.D. Jamis Acosta Guerra, declaró un receso hasta el martes 29 de septiembre de 2026, a las 10:00 a. m., y solicitó al personal de la Comisión distribuir entre los comisionados toda la correspondencia y los aportes recibidos, para continuar el debate en la fecha señalada.

B. Sesión de 29 de septiembre de 2026

Siendo las 10:30 a. m., del 29 de septiembre de 2026, se reanudó la sesión permanente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, para continuar el Primer Debate del Proyecto de Ley No.705, donde se contaba con el quórum reglamentario a saber: H.D. Jamis Acosta G., como presidente; Julio de la Guardia, secretario; José Luis Varela Rodríguez, Jorge González y Yamireliz Chong y los diputados suplentes Berta Moreno, Luis Charris Abrego y Marta Sandoya.

Se leyó la correspondencia donde constaba la habilitación del suplente Arnulfo Arias Olivares por el H.D. Julio De la Guardia.

Inmediatamente, el presidente dispuso la lectura de todas las emisiones de concepto recibidas, para lo cual se designó una relatora que diera lectura a las mismas, las cuales contenían lo siguiente:

- **AES Panamá**, concentró sus observaciones en el artículo 8 del proyecto, que modifica el artículo 59 de la Ley 6 de 1997. La empresa solicitó eliminar esta modificación y conservar el régimen vigente, al considerar que la extensión del límite de participación a

nuevas licencias y a determinadas operaciones corporativas requería una justificación técnica, económica y jurídica específica. De manera subsidiaria, propuso que cualquier límite se calcule sobre la capacidad instalada del mercado nacional y que se diferencien las concesiones de las licencias de generación. Solicitó incorporar salvaguardas de no retroactividad, protección de derechos adquiridos, neutralidad tecnológica, libertad contractual y seguridad del abastecimiento, así como excluir expresamente del cómputo a los grandes clientes, las transacciones regionales y la demanda atendida mediante contratos bilaterales.

- **Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá y presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios**, señaló que la reforma debía complementar los derechos de los usuarios con mecanismos de representación, asistencia y solución de controversias. Cuestionó la concentración de las funciones de regulación, fiscalización y resolución de reclamos en la autoridad reguladora y las demoras que, según la organización, enfrentan los usuarios para obtener un resarcimiento efectivo.

- **NATURGY**, expresó respaldo a los objetivos de continuidad, calidad y ampliación de la cobertura, y presentó observaciones sobre seis materias principales: aplicación temporal de la ley, reglas de los procesos competitivos, debido proceso, reserva legal, equilibrio económico de las concesiones y obligaciones de los distintos segmentos del sistema eléctrico.

- **Generadora Gatún**, manifestó que el límite del 30 % previsto en el artículo 8 podía restringir nuevas inversiones y la expansión de la capacidad de generación. Solicitó distinguir entre concesiones y licencias y delimitar el alcance de las fusiones, cesiones, absorciones y otros mecanismos sujetos al límite, para evitar incertidumbre en operaciones de financiamiento y reorganización empresarial. En electrificación rural pidió armonizar el reconocimiento de las inversiones de las distribuidoras en el valor agregado de distribución con las fuentes de financiamiento establecidas en el artículo 89 de la Ley 6 de 1997. Propuso eliminar el aporte de las generadoras si se mantiene el reconocimiento integral de esas inversiones a través de la tarifa, a fin de evitar, según su planteamiento, una duplicidad económica. También solicitó que los elementos esenciales de las obligaciones de los agentes queden definidos en la ley y que la reglamentación desarrolle sus aspectos técnicos y procedimentales.

- La **Oficina de Electrificación Rural** del Ministerio de la Presidencia manifestó que no había participado en la elaboración inicial del proyecto y presentó observaciones sobre las disposiciones que inciden en sus competencias. Solicitó precisar su función de coordinación, planificación y evaluación técnica de los proyectos en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas, así como la participación de la Secretaría Nacional de Energía y de la ASEP. Sobre los artículos 6, 9 y 10 del proyecto, propuso

que la OER supervise las obligaciones de electrificación rural y notifique los incumplimientos a la ASEP. Planteó revisar la coordinación prevista con la Secretaría Nacional de Energía y precisar los supuestos en que intervienen las distribuidoras, las zonas comprendidas y las fuentes de financiamiento, para evitar superposición de funciones. En relación con el artículo 14, diferenció los proyectos de extensión de redes, que pueden incorporarse a los activos de las distribuidoras, de los sistemas eléctricos aislados. Solicitó mecanismos de libre concurrencia para contratar la administración, operación y mantenimiento de estos últimos y recursos presupuestarios para su sostenibilidad. Propuso además organizaciones comunitarias o juntas rurales encargadas de operar las instalaciones, administrar los fondos y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo.

El H.D. Varela solicitó que las emisiones no fueran leídas sino enviadas a los comisionados toda vez que, los que habían enviado nota estaban anotados para hacer uso de la palabra, por tanto, estos iban a sustentar sus emisiones y no era necesario leerlas todas, por lo que, salvo mejor criterio, solicitó se continuará con las consultas. Esta solicitud fue acogida por la comisión.

El presidente dejó constancia de todas las emisiones de concepto recibidas hasta la fecha a saber: AES Panamá, Naturgy, Generadora Gatún, UNCUREPA, OER – Presidencia, Secretaria Nacional de Energía, ENSA, PANAM, SITIESPA, SIP, MIAMBIENTE, ANPAG, APEDE, Abdul Escobar, AGRANDEL, Morgan & Morgan, Comité de Defensa de los Servicios Públicos.

Continuando con las consultas, se siguió con el listado de personas anotadas para hacer uso de la palabra, y se cedió la palabra a los siguientes representantes de instituciones y gremios del país: Cinthya Camargo de NATURGY; Jeannette Bravo de la firma de abogados ARIFA; Ariel Núñez de SITIESPA; Ricardo Grisales de ENSA; Abdul Escobar, abogado independiente; Alberto Avilés de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP); Esteban Barrientos de Generadora Gatún; Félix Molinar de APEDE; Marta Bernal de ANPAG; Eliécer Abrego del Comité de Defensa de los Servicios Públicos; Giovanni Fletcher de UNCUREPA, entre otros, los cuales manifestaron lo siguiente:

Cintia Camargo Saavedra - Naturgy, presentó observaciones centradas en la seguridad jurídica, el derecho a competir y el derecho de defensa. Solicitó que el artículo 27 estableciera una regla general de aplicación prospectiva que respetara los contratos y derechos adquiridos. Señaló que los contratos de EDEMET y EDECHI vencen el 21 de octubre de 2028 y cuestionó que únicamente los artículos 11 y 12 contemplaran expresamente una transición. Advirtió que la combinación de nuevas obligaciones del artículo 10, nuevas causales de terminación del artículo 6 y restricciones para participar del artículo 4 podría afectar a los concesionarios actuales. Pidió reglas uniformes, publicadas antes del proceso competitivo, y precisiones sobre el artículo 13. Cuestionó la eliminación de garantías en los recursos, la ampliación del cobro coactivo y el recargo del 2 % mensual. Propuso un Tribunal

Administrativo de Servicios Públicos y la posibilidad de suspender la ejecución mediante fianza o garantía bancaria durante la revisión judicial. Respaldó reconocer las inversiones rurales dentro del valor agregado de distribución, incluyendo operación y mantenimiento, y pidió aclarar el destino y funcionamiento del fondo de electrificación rural.

Ariel Muñoz - SITIESPA, solicitó que se examinara e incorporara la propuesta sindical junto con las del Ejecutivo y la bancada VAMOS. Consideró que la reforma debía atender el costo de la electricidad, además de la calidad y continuidad del suministro. Cuestionó el cargo denominado potencia energizada, su impacto tarifario y lo que describió como una doble facturación de la potencia. Contrastó precios de contratos antiguos con los de contrataciones recientes. Pidió protección de la estabilidad laboral, las convenciones colectivas, la salud y seguridad ocupacional y los derechos de los trabajadores frente a cambios de operador o nuevas figuras comerciales.

Ricardo Grisales - ENSA, manifestó apoyo general a la reforma, sujeto a precisiones. Pidió criterios simétricos de precalificación para todos los interesados, incluidos los titulares actuales, y una metodología de valor justo de mercado reconocida, transparente, reproducible y divulgada antes del proceso competitivo. Acompañó la electrificación rural, siempre que las obligaciones de calidad, inversión, operación y mantenimiento consideraran las condiciones de las zonas alejadas.

Cuestionó que los retrasos en la aprobación de fórmulas tarifarias pudieran impedir recuperar diferencias a favor de las empresas o de los usuarios y solicitó un plazo perentorio para aprobar los nuevos pliegos. Pidió proteger el ingreso máximo permitido y el periodo tarifario 2026 a 2030 mediante disposiciones transitorias. Defendió mantener el silencio administrativo positivo y objetó que la ASEP cobrara coactivamente créditos a favor de clientes. Solicitó reforzar las obligaciones de calidad e inversión de ETESA y distinguir públicamente el origen y responsable de cada falla.

Abdul Escobar, propuso una fiscalización basada en acceso directo, automatizado, remoto y seguro a los registros primarios de medición y operación, para que la ASEP calculara los indicadores de calidad sin depender exclusivamente de informes de las distribuidoras. Planteó obligaciones de acceso, conservación, integridad y trazabilidad de los datos, así como sanciones por negar su consulta. Solicitó reconocer el derecho del usuario a consultar y obtener gratuitamente los datos de su medidor y a proponer cambios en las normas y reglamentos eléctricos.

Alberto Avilés - CCIAP, respaldó la calidad del servicio, los créditos a clientes, la fiscalización y la reducción de los plazos de reclamo, con causales objetivas, proporcionalidad y debido proceso. Pidió reglas previsibles para concesiones, valoración de acciones, rentabilidad y recuperación de inversiones. Solicitó una revisión técnica del artículo 8, preservando la competencia, la neutralidad tecnológica y el abastecimiento, y transparencia en las compras de energía.

Félix Molinar - APEDE, señaló los objetivos generales de la reforma y presentó condiciones para su ejecución: identificar con precisión los incumplimientos y responsables; mantener créditos en factura y reclamos más rápidos; emplear metodologías públicas y auditables; financiar de forma explícita la electrificación rural; graduar las sanciones y garantizar la defensa; y respetar los contratos vigentes. Recomendó evaluar la separación del Centro Nacional de Despacho de ETESA y su conformación como una entidad independiente, con autonomía administrativa y financiera.

Marta Bernal - ANPAG, propuso que el límite del artículo 8, que modifica el artículo 59, se calculara sobre la capacidad instalada total del mercado nacional, en vez del consumo o generación efectiva, por su mayor estabilidad y verificabilidad. Planteó un límite del 30 %, incluyendo participación directa e indirecta y adquisiciones de licencias o concesiones. Solicitó precisar excepciones para generación dedicada, centros de datos, exportaciones y sustitución de capacidad, y permitir ajustes motivados por seguridad de abastecimiento. Para las compras de energía y los pliegos especiales de los artículos 82 y 83 de la Ley 6, recomendó actos de concurrencia conjuntos entre distribuidoras como regla general, para mejorar la comparabilidad de ofertas y la señal de precios.

Giovanni Fletcher - UNCUREPA e IPADECU, cuestionó la persistencia de interrupciones, daños a electrodomésticos y prolongados trámites administrativos y judiciales para obtener resarcimientos. Solicitó mecanismos más rápidos, comprensibles y accesibles para resolver controversias. Propuso un sistema de arbitraje de consumo, solicitado voluntariamente por el usuario, con un tribunal tripartito y la posibilidad de resolver mediante especialistas técnicos o jurídicos.

Finalizada las intervenciones, el presidente de la Comisión, H.D. Jamis Acosta Guerra, declaró un receso hasta el 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m., y solicitó al personal de la Comisión distribuir entre los comisionados toda la correspondencia y los aportes recibidos, para continuar el debate en la fecha señalada.

C. <u>Sesión de 30 de septiembre de 2026</u>

El 30 de septiembre de 2026, a las 10:39 a.m., el presidente de la Comisión, HD. Jamis Acosta Guerra, reanudó la sesión permanente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos para continuar con el Primer Debate del Proyecto de Ley No.705, previa constatación del quórum reglamentario, donde estaban presentes los diputados: Jamis Acosta, como presidente; Julio de la Guardia, secretario; Jorge González y Yamireliz Chong, y los diputados suplentes Berta Moreno, Luis Charris Abrego, Marta Sandoya y Gumersinda de Polo, debidamente habilitados para esta reunión. El comisionado Julio De la Guardia, informó que no existía correspondencia adicional para leer, por lo que, el presidente continuó con la lista de oradores.

El presidente otorgó la palabra a Ramón Varela, de la firma de abogados Morgan & Morgan, destacó que el marco regulatorio había favorecido el desarrollo y la inversión en el sector

eléctrico, y formuló observaciones a los artículos 22 y 23 del proyecto donde solicitó desestimar las modificaciones cuestionadas. Sobre el artículo 22, consideró que convertir un incumplimiento del contrato de concesión en infracción administrativa podía afectar el equilibrio entre las partes y permitir que la interpretación del contrato quedara al arbitrio de una de ellas.

El presidente la comisión, abrió el compás para que los comisionados que deseaban hacer uso de la palabra, a lo que el comisionado HD. José Antonio Pérez Barboni, planteó modificar el artículo 59 de la Ley 6 de 1997 para que el límite del 30 % se calcule sobre la capacidad instalada de generación del mercado nacional. Sostuvo que la regulación debía promover competencia y precios accesibles sin impedir la participación de agentes capaces de ofrecer suministro eficiente. También propuso que los costos de abastecimiento y conexión de grandes suministros, como centros de datos, sean asumidos por sus beneficiarios y no trasladados a los clientes regulados. Este Solicitó a la Secretaría Nacional de Energía y a la ASEP evaluar un criterio intermedio que permita medir la concentración con bases técnicas claras. Recomendó que los elementos esenciales de ese cálculo queden suficientemente determinados en la ley y que la reglamentación no concentre una discrecionalidad excesiva. Reiteró que la apertura a más oferentes debía valorarse por su efecto en el consumidor final.

En ese contexto, el doctor Rodrigo Rodríguez Jaramillo de la SNE, sostuvo que la capacidad instalada, por sí sola, no refleja adecuadamente la concentración del mercado, debido a las diferencias de producción y de factor de planta entre centrales solares, eólicas, hidroeléctricas y térmicas. Consideró más apropiado medir la energía aportada al consumo nacional o la que podría producirse bajo condiciones probables, sin perjuicio de la decisión legislativa que adopten los comisionados.

Sobre la separación entre comercialización y distribución, expresó reservas respecto de los beneficios para clientes residenciales de bajo consumo. Señaló riesgos de selección de clientes, costos de medición, concentración comercial y necesidad de un proveedor de último recurso. Indicó que los grandes clientes ya pueden contratar energía fuera del régimen tarifario regulado. Respecto del autoconsumo, valoró positivamente su reconocimiento legal mediante derechos y obligaciones, pero recomendó mantener flexibilidad regulatoria en los parámetros técnicos y en la medición neta. Sobre el Centro Nacional de Despacho, consideró viable fortalecer su independencia técnica dentro de ETESA, con gobernanza diferenciada y recursos identificados para la operación integrada del sistema.

Posteriormente, le fue concedida el uso de la palabra el señor Ariel Núñez, representante sindical de SITIESPA, quien retomó los planteamientos formulados en la jornada anterior sobre el artículo 59. Diferenció la capacidad instalada nominal, la potencia firme y la generación efectiva, y advirtió que el uso aislado de cualquiera de esas magnitudes puede producir una lectura incompleta de la concentración. Consideró necesario tomar en cuenta la participación accionaria directa e indirecta de los grupos económicos. Propuso combinar indicadores de capacidad instalada, capacidad firme, generación neta anual, energía y potencia contratadas y participación en el mercado ocasional.

En ese mismo orden, el diputado Carlos Agustín Afú, solicitó la palabra con el fin de consultar sobre los artículos 6 y 21 del proyecto de ley No.705 los cuales no establecían expresamente una fecha diferenciada de entrada en vigencia y las garantías que se preveían para los contratos, derechos y obligaciones constituidos bajo el régimen actual. Solicitó un régimen transitorio claro y destacó la importancia de preservar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones en los procesos de licitación.

La licenciada Noemí Thiele de la SNE manifestó que la intención del proyecto es establecer obligaciones futuras y que conviene precisar expresamente las normas sujetas a una vigencia posterior. Explicó que no se pretende exigir obligaciones incompatibles con los contratos de concesión vigentes y que los artículos relativos al proceso de venta del paquete mayoritario requieren una revisión específica de su aplicación temporal. Sobre los recursos administrativos, indicó la licenciada Thiele, que las excepciones al efecto suspensivo buscan que el usuario reciba oportunamente el resarcimiento o la reducción tarifaria vinculados a deficiencias del servicio.

El Presidente de la cuestionó sobre un posible doble juzgamiento, a lo que la licenciada Noemí Thiele sostuvo que este está prohibido y que la propuesta fue elaborada considerando las garantías constitucionales y legales. También explicó que la cláusula penal asociada a la terminación del contrato compensaría al Estado, sin extinguir el derecho de los usuarios a recibir el resarcimiento que les corresponda.

También participó, el ingeniero Jorge Billingslea, Director Nacional de Electricidad de la ASEP, quien explicó que el límite de participación tiene una finalidad preventiva frente a la concentración y los riesgos para la seguridad del suministro. Aclaró que no se dirige a un grupo económico específico ni implica afirmar que exista un abuso demostrado de poder de mercado. Reiteró que la propuesta no pretende modificar retroactivamente la participación ni las instalaciones existentes y que su reglamentación debe ser transparente para preservar las condiciones de inversión.

Continuando con la discusión el diputado Acosta Guerra, cede la palabra a los diputados presentes, donde la diputada suplente Berta Moreno consultó sobre las fluctuaciones de voltaje, y preguntó por los mecanismos para identificar al agente responsable de interrupciones originadas en generación, transmisión o distribución, y por el destino de las multas y las penalidades contractuales.

El comisionado Julio De la Guardia, haciendo uso de la palabra, solicitó estadísticas sobre los reclamos resueltos a favor de los usuarios, los montos efectivamente resarcidos, los casos llevados ante la Corte Suprema de Justicia y el tiempo de resolución. Planteó la necesidad de evitar que los consumidores deban asumir costos de representación judicial y esperar períodos prolongados para obtener compensaciones por equipos dañados. Propuso evaluar mecanismos que permitan ejecutar con mayor rapidez las decisiones de la ASEP, incluidos compromisos en los futuros pliegos de licitación o tratamientos diferenciados según la cuantía del reclamo. La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez expresó su disposición a estudiar alternativas y recordó la necesidad de respetar el debido proceso y el

derecho de las partes a acudir a la jurisdicción competente. Señaló también, que la reforma busca hacer efectivo el resarcimiento al usuario una vez agotada la vía gubernativa, en los supuestos previstos de deficiente prestación y reducción tarifaria por calidad, sin eliminar el derecho del prestador a presentar una demanda ante la Corte. Indicó que la distribuidora atiende al usuario por su relación contractual y que, si el origen de la falla corresponde a transmisión o generación, se investigan las responsabilidades para que el agente causante compense al distribuidor. Sobre las estadísticas, mencionó una proporción aproximada de 45 % de decisiones favorables al cliente y 55 % desfavorables entre los reclamos recibidos por el regulador. Aclaró que ese universo no comprende los casos resueltos directamente por las distribuidoras y se comprometió a aportar el detalle de los montos pagados y judicializados. Mencionó que se había eliminado la mora acumulada de reclamos y que la entidad atiende las solicitudes dentro de los plazos regulatorios.

La comisionada Yamireliz Chong, solicitó una revisión integral que permita valorar el efecto de la reforma en la tarifa y en la calidad del servicio. Insistió en que el debate debía apoyarse en escenarios numéricos y en la participación conjunta de generación, transmisión, distribución, ASEP y Ejecutivo. Sobre electrificación rural pidió estimar cómo las inversiones podrían reflejarse en las facturas, y consultó sobre el costo por variación de combustible y los factores que explican cambios en el precio final. Propuso ampliar el examen a la independencia del Centro Nacional de Despacho, la autonomía de la autoridad reguladora, la separación entre comercialización y distribución, la generación distribuida, la eficiencia energética, el autoconsumo, la medición y los servicios prepagos. Manifestó respaldo a determinadas disposiciones del proyecto, entre ellas el valor justo de mercado, las nuevas causales de terminación y las protecciones al consumidor, y solicitó profundizar en sus efectos y garantías. Consultó por el alcance de las multas, su destino y los plazos de ejecución. Propuso valorar compensaciones económicas directas a los afectados, en lugar de limitarse a créditos en la factura, y pidió distinguir el plazo para responder un reclamo de los plazos para investigar y ejecutar las decisiones. Sobre autoconsumo, solicitó un mecanismo que permita el ahorro del usuario con paneles sin aumentar los costos de quienes no cuentan con ellos. Sobre el Centro Nacional de Despacho, expresó preferencia por una autonomía más amplia y explicó las limitaciones que, a su juicio, enfrentaba una iniciativa parlamentaria para crear una entidad y asignarle presupuesto.

El comisionado Jorge González López, destacó el derecho de todos los ciudadanos a participar en el debate y solicitó soluciones al alto costo y a las deficiencias del suministro. Consultó sobre el artículo 5, que adiciona el artículo 48A, y la metodología del valor justo de mercado y del importe que podría recibir el Estado en el proceso de venta del paquete accionario mayoritario. En este sentido, el Dr. Rodríguez del SNE explicó que el mecanismo busca promover competencia e impedir que el titular presente ofertas excesivas por sus propias acciones sin consecuencia económica; no está diseñado para asegurar un ingreso al Estado en todos los casos.

El presidente de la Comisión, diputado Jamis Acosta Guerra, destacó que la discusión debía trasladar las preocupaciones de los usuarios a medidas que mejoren la calidad y el costo del servicio. Consultó expresamente al Ejecutivo y a la ASEP sobre la posible incidencia en las tarifas, la no retroactividad y la efectividad de los resarcimientos. Solicitó que las respuestas constaran en el acta para el trámite posterior. Reiteró la recepción de los aportes de instituciones, empresas, gremios y usuarios y dispuso su distribución a los comisionados. Invitó a presentar las propuestas restantes para darles lectura en la siguiente jornada y proceder posteriormente a su discusión y votación.

Ulteriormente, el presidente de la Comisión, H.D. Jamis Acosta Guerra, dio por concluidas las intervenciones de dicha jornada y declaró un receso hasta el jueves 1 de octubre de 2026 a las 10:30 a. m.

D. Sesión de 1 de octubre de 2026

Continuando la sesión permanente de Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, el presidente, Jamis Acosta Guerra, reanudo la sesión el jueves 1 de octubre de 2026, donde estuvieron presente los comisionados, Julio De la Guardia, secretario; José Antonio Pérez Barboni, y Yamireliz Chong; y los diputados suplentes Berta Moreno, Luis Charris Abrego y Marta Sandoya, habiendo el quorum reglamentario.

Durante la reunión se dio lectura a la Resolución No.102 de 29 de septiembre de 2026, mediante la cual la Directiva de la Asamblea Nacional habilitó a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos para sesionar simultáneamente con el Pleno Legislativo el jueves 1 de octubre, a las 10:00 a. m., en el Auditorio Carlos Titi Alvarado.

El diputado Luis Charris solicitó ampliar la explicación del artículo 8 y precisar cómo el límite del 30 % beneficiaría a los usuarios. Consultó además por la seguridad de las inversiones de empresas que ya superaran ese porcentaje. El representante técnico de la ASEP respondió que el límite busca prevenir concentración, riesgos para el suministro y capacidad de alterar las condiciones del mercado, e incorporar al control las licencias de generación, además de las concesiones.

El Ing. Billingslea, Director Nacional de Electricidad de la ASEP, manifestó que la capacidad instalada no constituye, por sí sola, el parámetro más adecuado y que los diputados debían resolver sobre las alternativas discutidas. Aclaró que, conforme a la intención expuesta de la propuesta, un agente que ya supera el límite podría seguir operando con sus instalaciones existentes, mientras la restricción se aplicaría a nuevas solicitudes hasta que su participación se sitúe dentro del umbral.

Concluida las intervenciones, se dio lectura a las propuestas de modificación por parte de las relatoras, donde se presentaron 85 propuestas compuestas por dos bloques: el primer bloque (29 propuestas) presentado por HD. Jamis Acosta y otros diputados, y un segundo bloque (56 propuestas) presentado por los HHDD. Jorge González López y Yamireliz Chong.

Las proposiciones presentadas por parte del diputado Jamis Acosta y otros diputados, se centraron en: la intervención de los prestadores para garantizar la continuidad del servicio, la definición y determinación del valor justo de mercado, la precalificación y venta del paquete accionario mayoritario, las causales de terminación de las concesiones y las restricciones a nuevas licencias o concesiones de generación. En electrificación rural se propuso vincular la exigibilidad de los proyectos a su aprobación y reconocimiento tarifario. También se incluyeron ajustes a obligaciones de las distribuidoras, compras de energía, rentabilidad, reclamos, infracciones, sanciones, recursos administrativos y cobro coactivo. A su vez, se incorpora una propuesta para conservar el silencio administrativo favorable y delimitar el cobro a créditos firmes, líquidos, exigibles y determinados, con restitución o compensación cuando el acto que lo sustenta sea dejado sin efecto. Las adiciones sobre el Centro Nacional de Despacho contemplaron independencia técnica y funcional dentro de ETESA, garantías para su dirección, identificación de recursos para la operación integrada, protección de decisiones operativas, incompatibilidades, registros verificables y adecuación administrativa. Se presentaron además disposiciones sobre autoconsumidores, proyectos de generación construidos sobre bienes de dominio público, concordancia normativa, vigencia y modificación del título del proyecto.

Las propuestas de los comisionados Jorge González López y Yamireliz Chong, incluyeron definiciones y obligaciones orientadas a la modernización de redes, la publicidad de información, los planes de inversión y mantenimiento, las garantías de cumplimiento, la graduación de infracciones y sanciones y la supervisión de la gestión regulatoria. Se plantearon ajustes al valor justo de mercado, al importe y al tratamiento de los reclamos y compensaciones de los clientes. Las adiciones abordaron la independencia técnica y funcional del Centro Nacional de Despacho, la separación entre distribución y comercialización, los comercializadores independientes, la apertura gradual a clientes elegibles, el acceso no discriminatorio a las redes, el código de comercialización, una plataforma de cambio de proveedor y el suministro de último recurso. También se propusieron reglas diferenciadas de tarifas, cargos de red, medición, liquidación y facturación para esas actividades. En protección de los usuarios se propusieron una instancia especializada y un procedimiento de reclamos. En generación distribuida se incluyeron derechos de autoconsumo, interconexión, medición neta, tratamiento de excedentes y transparencia de la capacidad disponible en las redes. El bloque comprendió asimismo eficiencia energética, gestión de demanda, garantías vinculadas a medidores y obligaciones mínimas de inversión, junto con las adecuaciones de concordancia normativa.

Una vez finalizada la lectura de los dos bloques de propuestas antes descrito, el presidente de la comisión, continuó con el debate y cedió la palabra al doctor Rodrigo Rodríguez Jaramillo, quien agradeció las intervenciones y los aportes recibidos, los calificó como enriquecedores y manifestó confianza en que las decisiones de la Comisión favorezcan a la población y mejoren el servicio público de electricidad.

El presidente de la comisión, Jamis Acosta Guerra, agradeció la participación de los sectores convocados y dejó constancia de que el debate no había concluido, por lo declaró un receso hasta el martes 6 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., para discutir las propuestas presentadas y leídas durante la sesión.

E. Sesión de 6 de octubre de 2026

Continuando la sesión permanente, el presidente, Jamis Acosta Guerra, reanudo la sesión el 6 de octubre de 2026, donde estuvieron presente los comisionados, Julio De la Guardia, secretario; Crispiano Adames Navarro, José Luis Varela, y los diputados suplentes Berta Moreno, y Kevin Carrillo, habiendo el quorum reglamentario. Posteriormente se incorporaron a la reunión los comisionados José Pérez Barboni, Jorge González, Yamireliz Chong, y el HDS. Luis Charris Abrego.

Una vez iniciada la sesión se procedió a dar lectura a las propuestas en mesa, las cuales consistían en el retiro de las propuestas de los artículos 8, 9, 26, y los artículos nuevos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 presentadas por el diputado James Acosta y otros al proyecto de ley No.705, las cuales fueron aprobadas, y se leyeron dos propuestas nuevas a los artículos 8 y 26.

Seguidamente, el Presidente puso a discusión de los Comisionados las modificaciones leídas y luego se procedió a la votación del proyecto de ley en mención artículo por artículo. Resultando el Proyecto de Ley No.705, con 6 votos a favor y 3 abstenciones, siendo así aprobado en Primer Debate.

V. DE LAS MODIFICACIONES

Se modificaron los siguientes artículos: **Artículo 1**, relativo a la continuidad del servicio**; artículo 2**, se adicionaron las definiciones, tales como autoconsumidor, se precisan los límites de actuación del interventor y valoración técnica independiente; **artículo 3**, se permite reservar datos por riesgos acreditados para infraestructura crítica, mediante resolución motivada; **artículo 4**, referente a las concesiones de distribución; **artículo 5**, Venta al paquete mayoritario, exige valoración técnica independiente, metodología publicada antes de la convocatoria y determinación motivada con información financiera y operativa verificable; **artículo 6**, terminación de concesiones, se precisa que los indicadores de calidad deben estar previstos en el contrato; **artículo 8**, restricciones a generadoras; **artículo 10**, multas contractuales; **artículo 11 y 12**, sobre compras de energía en bloque serán conjuntos y, excepcionalmente, individuales; **artículo 13**, Para las nuevas concesiones vinculadas a mayor competencia o mejora del servicio, se exigen criterios objetivos publicados en el Pliego de Precalificación; **artículo 17**, Solo se reconocerán activos útiles y utilizados, inversiones prudentes y costos eficientes y verificables. Las pérdidas superiores a la meta regulatoria serán asumidas por la distribuidora y no trasladadas a los clientes; **artículo 20**, Se aclara que el plazo de quince días para que la distribuidora resuelva el reclamo corresponde a días calendario; **artículo 21**, Se precisa que las conductas del distribuidor

deben estar expresamente previstas en la cláusula penal de su contrato de concesión; **artículo 22**, Las multas contractuales destinadas al Tesoro Nacional deben estar ejecutoriadas y corresponder a contratos que contemplen expresamente la cláusula penal; **artículo 23**, se establece el efecto devolutivo para situaciones particulares; **artículo 24**, Se exigen créditos firmes, líquidos, exigibles y determinados. El recargo fijo del 2 % mensual se sustituye por el que corresponda conforme a la ley. Se agrega restitución o compensación si queda sin efecto el acto que sustentó el cobro; **artículo 26**, adiciona al artículo indicativo las propuestas nuevas; **artículo 27**, Vigencia. Se enumeran expresamente las disposiciones diferidas: numerales 3 al 7 del artículo 6 y artículos 11 y 12, que regirán desde el 22 de octubre de 2028; y se modificó el título.

Se adicionaron **dos artículos nuevos**, uno relativo a los Bienes de dominio público. Que adiciona el artículo 50-A de la Ley 6 de 1997: la concesión de uso de bienes públicos para generación podrá durar lo mismo que la concesión o licencia de generación; ambas quedan vinculadas y se extinguen conjuntamente y otro artículo nuevo sobre Autoconsumidores.

A su vez, se hicieron adecuaciones de forma al Proyecto de Ley No.705 donde se adecuó la técnica legislativa a la iniciativa con la finalidad de que el Texto Único incorporará todas las modificaciones y adiciones de forma ordenada y con numeración consecutiva.

En síntesis, en el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 705, se aprobaron con seis votos a favor y tres abstenciones: Veinte (20) propuestas de modificación, ocho (8) artículos originales, dos (2) artículos nuevos, y se modificó el Titulo así: **Que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1997, Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad y dicta otras disposiciones**.

VI. PARTE RESOLUTIVA

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto de Ley N° 705 y en consideración a lo antes expuesto,

RESUELVE:

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°705, **Que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1997, por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad y dicta otras disposiciones**.
2. Presentarlo en un Texto Único.
3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea sometido a Segundo Debate.

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS.

HD. JAMIS ACOSTA GUERRA
Presidente

HD. NÉSTOR A. GUARDIA J.
Vicepresidente

HD. JULIO DE LA GUARDIA A.
Secretario

HD. ARIEL VALLARINO A.
Comisionado

HD. JOSÉ LUIS VARELA R.
Comisionado

HD. CRISPIANO ADAMES N.
Comisionado

HD. JOSÉ PÉREZ BARBONI
Comisionado
ME ABSTENGO

HD. JORGE A. GONZÁLEZ
Comisionado
Me Abstengo

HD. YAMIRELIZ CHONG S.
Comisionada
Abstención

ASAMBLEA NACIONAL
Secretaría General
Presentación 7/10/26
Hora 5:53
A Debate
A Votación

TEXTO ÚNICO

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al **Proyecto de Ley No. 705, Que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones.**

Panamá,06 de octubre de 2026.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No.705, arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley tal cual como fue aprobado en Primer Debate por esta Comisión, con sus modificaciones y adiciones.

PROYECTO DE LEY No. 705

De 06 de octubre de 2026

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1997, Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad y dicta otras disposiciones

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Se adiciona el artículo 4-A **a** la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 4-A. Garantía de la continuidad del servicio. Para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad **mediante resolución motivada,** durante el **plazo concedido para subsanar los incumplimientos** o mientras se rescinda o **dé** la resolución administrativa del contrato o la terminación de la licencia correspondiente.

Antes de disponer la intervención, la Autoridad notificará por escrito al prestador los incumplimientos identificados y le concederá un plazo técnicamente justificado para subsanarlos. Vencido dicho plazo sin que hayan sido subsanados, la Autoridad podrá ordenar la intervención.

Cuando exista un riesgo inminente para la continuidad del servicio, podrá disponer la intervención inmediata mediante resolución motivada, garantizando la notificación y la oportunidad de defensa sin dilaciones indebidas.

Los recursos administrativos que procedan contra la resolución que ordene la intervención se concederán en efecto devolutivo, sin suspender su ejecución.

Para tal fin, se designará un interventor y la remuneración de este será sufragada por el propio prestador del servicio. El interventor quedará inhabilitado para mantener vínculos

comerciales y/o profesionales con la empresa objeto de la intervención, sus filiales o grupo económico, por un periodo de dos (2) años, **contados desde la terminación de su gestión.**

El interventor ejercerá funciones de administración, supervisión y gestión para adoptar las medidas operativas indispensables para garantizar la continuidad del servicio. No podrá realizar actos de disposición del patrimonio del prestador. El interventor rendirá informes periódicos y un informe final de su gestión.

La intervención durará únicamente mientras subsistan las causas que la motivaron. Toda prórroga requerirá una evaluación técnica y una resolución motivada que establezca su duración. La Autoridad revisará periódicamente la necesidad de mantenerla y ordenará su terminación cuando desaparezcan dichas causas.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará lo concerniente a la designación del interventor y al proceso de intervención establecido **en esta Ley.**

Artículo 2. Se adicionan los numerales 29, 30, 31, 32 **y 33** al artículo 6 de la Ley 6 de 1997 **así:**

Artículo 6. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

...

29. ***Autoconsumidor.*** **Cliente final que produce energía eléctrica mediante generación directamente conectada a sus instalaciones internas, destinada primordialmente a cubrir su propio consumo, con la posibilidad de inyectar los excedentes a la red de distribución en las condiciones que establezca la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.**

30. *Idoneidad Técnica.* Es el estado y funcionamiento efectivo de los activos destinados a la prestación del servicio público de electricidad, de forma regular y continua, dentro de los niveles de calidad establecidos en la zona de concesión, y conforme a las normas que apliquen.

31. *Interventor.* Profesional con experiencia en temas del sector eléctrico, con **facultades de administración, supervisión y gestión, para adoptar las medidas operativas indispensables** para garantizar la prestación eficiente e ininterrumpida del servicio público objeto de la concesión o licencia, **dentro de los límites establecidos en esta Ley.**

32. *Paquete Mayoritario.* Es el bloque no menor del 51% de la totalidad de acciones emitidas, cuyo propietario o propietarios ejercen el control de la empresa de distribución.

33. *Valor Justo de Mercado.* Es el valor de mercado del Paquete Mayoritario de las acciones de las empresas de distribución, que cada quince años se somete al proceso de venta. Este valor será determinado a través de un procedimiento establecido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, **con base en una valoración técnica realizada por profesionales o entidades independientes, con experiencia acreditada**

en valoración de empresas y sin conflictos de interés respecto de la empresa valorada, sus accionistas y los participantes en el proceso competitivo.

Artículo 3. Se adicionan los numerales 15 y 16 al artículo 12 de la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 12. Deberes y obligaciones. Los prestadores del servicio público de electricidad tendrán los siguientes deberes y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan otras disposiciones legales:

...

15. Facilitar la transparencia de la información en el mercado eléctrico, tomando en cuenta el interés público, la integridad y funcionamiento eficiente de dicho mercado, la competencia económica y la protección de los clientes.

16. Implementar, por parte de las empresas distribuidoras y de transmisión, los mecanismos centralizados y accesibles al público para consultas sobre la capacidad de sus redes. Las distribuidoras y la empresa de transmisión deberán disponer, en su página web, de un sistema de información que permita observar el estado de la red y las características técnicas básicas de los puntos de conexión que incluyan ubicación, características técnicas de la red, capacidad nominal de la subestación, transformador o red, y la disponibilidad para la conexión a la red.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá ordenar, mediante resolución motivada y por el tiempo estrictamente necesario, la limitación de publicaciones de datos cuya divulgación genere un riesgo específico y acreditado para la seguridad de la infraestructura crítica, de conformidad con la legislación sobre acceso a la información. La limitación comprenderá únicamente los datos cuya reserva resulte indispensable para proteger dicha infraestructura y deberá preservar la publicación de información suficiente para evaluar la disponibilidad de conexión sin revelar los datos protegidos. Esta limitación no podrá invocarse para negar información a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 4. El artículo 48 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 48. Concesión para distribución. Los contratos de concesión para distribución tendrán un término de quince (15) años. Antes de vencerse ese término, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos convocará a un proceso competitivo de concurrencia, de acuerdo con lo establecido en esta ley, para la venta del Paquete Mayoritario de las empresas de distribución. Como parte **de** este proceso competitivo de concurrencia, habrá una instancia de precalificación cuyo Pliego deberá ser aprobado **conforme lo dispone la normativa vigente**. Todas las empresas o consorcios interesados en participar **deberán cumplir esta etapa.**

Las bases de precalificación y el pliego de cargos deberán establecer requisitos, condiciones y criterios de evaluación uniformes para todos los participantes, entre ellos aquellos relativos a su experiencia, capacidad técnica, financiera y operativa, además del

grado de cumplimiento de obligaciones en concesiones otorgadas o títulos habilitantes equivalentes que les hayan sido otorgados. **Los requisitos y criterios de evaluación serán objetivos, medibles, verificables y proporcionales al objeto de la concesión.**

La convocatoria establecerá un calendario que permita preparar ofertas en condiciones de igualdad. Los pliegos y el proyecto de contrato se publicarán en las fechas previstas en el calendario, con antelación suficiente para preparar las ofertas, y el acceso al cuarto de datos se otorgará en iguales condiciones a todos los participantes habilitados, con protección de la información legalmente reservada. Las modificaciones sustanciales de las bases deberán acompañarse de una ampliación suficiente del plazo de presentación de ofertas.

Sólo aquellos que hubieren participado en la instancia de precalificación y cumplido con los requisitos establecidos en sus bases podrán presentar propuestas con base al pliego de cargos que especificarán los requisitos mínimos exigidos que deberán cumplir para participar en el proceso competitivo de concurrencia.

El Titular del Paquete Mayoritario, de haber precalificado, podrá presentar su oferta en el acto público de presentación de propuestas y, si su oferta fuere mayor o igual al precio más alto ofrecido por otros participantes, conservará la propiedad del Paquete Mayoritario. Por el contrario, si hubiere otro precio mayor, el Paquete Mayoritario será adjudicado al mejor oferente. En cualquiera de los dos casos, se otorgará una nueva concesión por otros quince (15) años.

Este mismo procedimiento competitivo se seguirá en el caso de terminación anticipada de la concesión por cualquier causa establecida en la presente ley o en el contrato de concesión.

En caso de terminación anticipada de la concesión, el Titular del Paquete Mayoritario no podrá participar directa o indirectamente en el proceso competitivo **cuando la terminación derive de incumplimientos imputables al concesionario, declarados mediante resolución debidamente ejecutoriada.**

Artículo 5. Se adiciona el artículo 48-A a la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 48-A. Importe a pagar por la venta del Paquete Mayoritario. Para determinar el importe a pagar por la venta se aplicará lo siguiente:

1. Si el ganador del proceso competitivo de concurrencia es el Titular del Paquete Mayoritario, éste entregará al Tesoro Nacional un pago en concepto de beneficio por el derecho de concesión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los literales siguientes.

Este monto de dinero a entregar al Tesoro Nacional aplicará cuando en el proceso de venta del Paquete Mayoritario participe sólo su Titular, o cuando, además de este, se reciban, una o más ofertas válidas adicionales. En cualquiera de estos casos, el cálculo se realizará de la siguiente manera:

a. Si la oferta del Titular del Paquete Mayoritario es al menos diez por ciento (10%) superior al Valor Justo de Mercado, y no existe una segunda oferta superior al Valor Justo de Mercado, el pago al Tesoro Nacional corresponderá al cien por ciento (100%) del diferencial entre el valor total ofertado por el Titular del Paquete Mayoritario y el Valor Justo de Mercado; o

b. Si la oferta del Titular del Paquete Mayoritario es al menos diez por ciento (10%) superior al Valor Justo del Mercado, y la segunda oferta más alta supera el Valor Justo de Mercado, el pago al Tesoro Nacional corresponderá al cien por ciento (100%) del diferencial entre el valor total ofertado por el Titular del Paquete Mayoritario de las acciones y el valor total de la segunda oferta más alta; o

c. Si la oferta del Titular del Paquete Mayoritario es la más alta y a la vez menor que el Valor Justo de Mercado más el diez por ciento (10%), no habrá abono al Tesoro Nacional.

2. Si el ganador del proceso competitivo de concurrencia no es el Titular del Paquete Mayoritario, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos entregará el importe por la venta a quien sea el Titular hasta ese momento.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos determinará el Valor Justo de Mercado del Paquete Mayoritario con base en una valoración técnica realizada por profesionales o entidades independientes, con experiencia acreditada en valoración de empresas y sin conflictos de interés respecto de la empresa valorada, sus accionistas y los participantes en el proceso competitivo.

La metodología de valoración deberá ser publicada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos antes de la convocatoria del proceso competitivo. La determinación del valor deberá estar debidamente motivada y sustentada en información financiera y operativa verificable.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará este artículo, así como el procedimiento para determinar el Valor Justo de Mercado del Paquete Mayoritario y su aplicación en el proceso de venta de **las acciones, con sujeción a los requisitos establecidos en este artículo.**

Artículo 6. El artículo 49 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 49. Terminación. El contrato de concesión terminará:

1.Por el vencimiento del término contractual.

2. Por declaración de quiebra, concurso de acreedores, disolución o suspensión de pagos del concesionario.

3. Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la presente ley o las derivadas del contrato.

4. Por incumplimiento reiterado en la ejecución de las obras o instalaciones comprendidas en el programa de inversiones, de acuerdo con la presente ley, el contrato de concesión y las reglamentaciones emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

5. Por el incumplimiento reiterado de la obligación de electrificación rural en las áreas rurales no servidas no rentables y no concesionadas, de acuerdo con la presente ley, el contrato de concesión y las reglamentaciones emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

6. Por incumplimiento reiterado de alguno o todos los indicadores de calidad del servicio establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, **previstos en el contrato de concesión.**

7. Si durante el periodo de la concesión la suma acumulada de las reducciones tarifarias, penalizaciones y multas aplicadas al concesionario por el incumplimiento de normativas vigentes y del contrato, supera el veinticinco por ciento (25%) del ingreso total anual facturado por el servicio público de distribución en el año inmediatamente anterior al momento de la evaluación.

8. Por cualquiera otra causa establecida en el contrato.

Los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 de este artículo comenzarán a regir a partir del 22 de octubre de 2028.

Artículo 7. Se adiciona el artículo 50-A a la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 50-A. <u>Proyectos de generación construidos sobre bienes de dominio público.</u> Por tratarse de un servicio público de utilidad pública, cuando los proyectos de generación eléctrica se desarrollen sobre terrenos o bienes de dominio público, la concesión que otorgue el Estado para su uso podrá tener un plazo igual al de la concesión o la licencia de generación aplicable.

La concesión sobre el bien de dominio público estará vinculada a la vigencia de la concesión o la licencia de generación y se extinguirá junto con esta.

Artículo 8. Que se adicione un numeral al artículo 51 de la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 51. <u>Sistema interconectado nacional.</u> En el sistema de interconectado nacional, podrán participar las siguientes entidades para la prestación del servicio:

...

7. Los autoconsumidores, que podrán generar energía eléctrica para cubrir su propio consumo e inyectar los excedentes a la red de distribución, conforme a esta Ley y a la regulación que expida la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 9. El numeral 7 de artículo 57 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 57. Obligaciones de los generadores. Los generadores están obligados a:

...

7. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal, abuso de una posición dominante en el mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia.

Artículo 10. El artículo 59 **de** la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 59. Restricciones. Las empresas de generación que presten el servicio público de electricidad y sus propietarios estarán sometidos a las siguientes restricciones:

1. Participar, directa o indirectamente, en el control de las empresas de distribución; y

2. Solicitar nuevas licencias y/o concesiones si, al hacerlo, atienden **o puedan atender**, directa o indirectamente, a través de otras empresas de generación u otros medios, más del treinta por ciento (30 %) **de la capacidad instalada** del mercado nacional. Este límite aplicará también a las adquisiciones de licencias y/o concesiones mediante fusiones, cesiones, absorciones o cualquier otro mecanismo, quedando su autorización supeditada a la verificación del porcentaje antes mencionado por parte de **la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos**. La Autoridad **e**stablecerá el procedimiento para la aplicación de este numeral.

El Órgano Ejecutivo podrá aumentar el porcentaje señalado en el numeral 2 del presente artículo, previa solicitud de la Autoridad sustentada en un informe debidamente motivado, cuando las condiciones de competencia en el mercado eléctrico **o seguridad de abastecimiento** lo justifiquen.

Artículo 11. El artículo 78 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 78. Alcance. El servicio de distribución comprende las actividades de compra de energía en bloque, el transporte de la energía por las redes de distribución, la entrega de la energía a los clientes finales y la comercialización de energía a los clientes.

El servicio de distribución comprende, además, la obligación de ejecutar proyectos de electrificación rural en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas que sean definidos por la Oficina de Electrificación Rural en conjunto con la Secretaría Nacional de Energía y aprobados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el proceso de revisión tarifaria.

Los proyectos de electrificación rural que ejecuten las empresas de distribución producirán la expansión automática de la zona de concesión del distribuidor que los ejecute.

Artículo 12. El artículo 80 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 80. Obligaciones. Las empresas distribuidoras tendrán las siguientes obligaciones:

1. Dar servicio a quien lo solicite en la zona mínima de concesión, sea que el cliente esté ubicado en esta zona o bien que se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros. Se exceptúa el caso de los grandes clientes que no hayan cumplido con los requisitos de demanda y aviso previo, que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establezca o que esté establecido en el respectivo contrato de concesión.
2. Extender la cobertura del servicio a las áreas rurales o con población dispersa dentro de su zona de concesión, conforme a lo dispuesto en el respectivo contrato de concesión.
3. Ejecutar las obras o instalaciones comprendidas en el programa de inversiones aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
4. Realizar sus actividades conforme a las disposiciones establecidas en esta ley y su contrato de concesión, prestando el servicio de distribución con los niveles de calidad que determinen la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, disponiendo para tal fin la utilización efectiva de los recursos asignados para la operación y mantenimiento que aseguren una adecuada conservación de la Idoneidad Técnica de la red de distribución eléctrica.
5. Proceder a la ampliación de las redes de distribución, cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro eléctrico y para cumplir con la obligación de electrificación rural de las áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas.
6. Cumplir con las normas y procedimientos aplicables para la compra de energía en bloque establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y para la operación integrada establecidas en el Reglamento de Operación.
7. Publicar los cuadros tarifarios aplicables ubicados en su zona de concesión y cobrar las tarifas aprobadas, de conformidad a las disposiciones establecidas en esta ley, su reglamento y las resoluciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
8. Realizar las inversiones que se requieran para la prestación eficiente del servicio conforme con los niveles de calidad establecidos, y para la implementación de redes inteligentes.
9. Medir los consumos reales de los clientes mediante instrumentos tecnológicos apropiados dentro de los plazos y términos que fije la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. De tener la empresa de distribución la necesidad de estimar el consumo del cliente sólo se admitirán el máximo de facturas estimadas que establezca la reglamentación emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
10. Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos en sus redes de forma que cumpla con la normativa vigente en materia de seguridad.
11. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal, abuso de una posición dominante en el mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia.
12. Atender las solicitudes de nuevos suministros en los plazos y términos establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos,
13. Entregar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos toda la información que éste le solicite en tiempo oportuno.

14. Destinar los montos correspondientes a los incumplimientos en los límites de calidad establecidos en la normativa vigente, dentro del plazo determinado en la resolución emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

15. Pagar al Tesoro Nacional el valor de las multas que resulten de la aplicación de la Cláusula Penal del Contrato de Concesión **en los contratos que la contemplen**. Dichas multas podrán ascender hasta veinte millones de balboas (B/.20,000,000.00), dependiendo de la gravedad de la infracción, su reincidencia o el grado de incumplimiento del contrato. Cada contrato de concesión establecerá expresamente las causales que dan lugar a multa y los montos correspondientes.

Artículo 13. El artículo 82 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 82. Compras de energía en bloque por empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras contratarán el suministro de energía y/o potencia mediante actos de concurrencia que realizarán en forma conjunta **y excepcionalmente** individual, prepararán los pliegos de cargos y efectuarán la convocatoria de los actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía, así como la evaluación y adjudicación de los contratos de suministro correspondientes, de acuerdo con los parámetros, criterios y procedimientos establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Una vez las empresas distribuidoras cuenten con la no objeción de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos a la adjudicación, procederán a la firma de los contratos de suministro resultantes. Estos contratos de suministro de energía y/o potencia no requieren del refrendo de la Contraloría General de la República para su perfeccionamiento.

Artículo 14. El artículo 83 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 83. Pliego de cargos especiales. Las empresas distribuidoras deberán realizar actos de concurrencia de compra de potencia y/o energía con pliegos de cargos especiales en forma conjunta **y excepcionalmente** individual, aprobados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Dichos pliegos de cargos estarán sujetos a las directrices de política energética dictadas por la Secretaría Nacional de Energía.

En los pliegos de cargos especiales se podrá fijar un precio de referencia para la contratación y podrán establecer condiciones específicas de compra.

Artículo 15. El artículo 85 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 85. Restricciones. Las empresas distribuidoras y sus propietarios estarán sometidos a las siguientes restricciones en la prestación del servicio:

1. Participar, directa o indirectamente, en el control de plantas de generación, cuando la capacidad agregada equivalente exceda el 15% de la demanda atendida en su zona de concesión.

2. Solicitar nuevas concesiones si, al hacerlo, atienden, directa o indirectamente, a través del control accionario de otras empresas de distribución u otros medios, más del 50 % del número de clientes en el mercado nacional. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá autorizar que se exceda este porcentaje cuando a su juicio sea necesario para:

a. Permitir la expansión de la concesión a la zona de influencia,

b. Permitir la expansión del sistema eléctrico del país,

c. Facilitar una mayor competencia en la Venta del Paquete Mayoritario de las Acciones,

d. Mejorar la calidad de servicio de las empresas de distribución.

Para la aplicación de los literales c y d de este artículo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, durante el proceso de venta del Paquete Mayoritario de las Acciones, establecerá cuáles empresas distribuidoras o sus propietarios podrán solicitar nuevas concesiones de distribución**. Los criterios conforme a los cuales se adopte esa determinación serán objetivos y se publicarán en el Pliego de Precalificación**.

3. Durante los primeros cinco años de vigencia de esta Ley, generar energía y comprar energía a otras empresas diferentes a la Empresa de Transmisión, cuando la capacidad de generación agregada equivalente exceda el 15% de la demanda atendida en su zona de concesión. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá autorizar que se exceda este límite temporalmente, cuando a su juicio sea necesario para atender circunstancias imprevistas o cuando a su juicio ello represente beneficio económico para los clientes.

4. Privilegiar a empresas afines, filiales, subsidiaras o relacionadas con cualquier tipo de información relacionada a la actividad de distribución. Cuando las empresas de distribución o sus propietarios tengan empresas filiales o subsidiarias que se dediquen a actividades no restringidas en el artículo 52 de esta Ley, no deberán hacer uso o entrega de información privilegiada o de sus clientes a la que pudiesen tener acceso en virtud del negocio de distribución. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará el procedimiento que deberán seguir las empresas para garantizar que dichas empresas afines, filiales, subsidiaras o relacionadas no hagan uso de información privilegiada.

Artículo 16. Se adiciona el artículo 86- A a la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 86-A Los proyectos de Electrificación rural que ejecuten las empresas de distribución de conformidad con esta ley, deberán considerarse en su totalidad como parte de los activos de las empresas distribuidoras en el cálculo del valor agregado de distribución.

Artículo 17. El artículo 98 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 98. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cuatro años a partir de su entrada en vigencia. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo que lesionan injustamente los intereses de los clientes o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. Vencido su periodo de vigencia, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no defina las nuevas.

Para tal efecto, no se considerarán grave error de cálculo las variaciones en las ventas ocasionadas por la suspensión del servicio eléctrico producto de la morosidad en la tasa de aseo.

Artículo 18. El artículo 99 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 99. Cobertura de costos. Las tarifas asociadas con el acceso y uso de las redes de transmisión cubrirán los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento de la red nacional de transmisión necesarios para atender el crecimiento previsto de la demanda, en condiciones adecuadas de calidad y confiabilidad y de desarrollo sostenible. Los costos se calcularán bajo el supuesto de eficiencia económica en el desarrollo el plan de expansión y en la gestión de la Empresa de Transmisión. Para los efectos de este cálculo, no se considerarán los costos financieros de créditos concedidos al concesionario.

Los costos utilizados como base para el cálculo de tarifas deben permitir a la Empresa de Transmisión tener una tasa razonable de rentabilidad, antes de aplicarse el impuesto sobre la renta, sobre el activo fijo neto invertido a costo original. Para efectos de este cálculo, se define como tasa razonable de rentabilidad aquella que calcule la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos que no difiera en más de dos puntos de la suma de la tasa de interés anual efectiva, promedio de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se fija la fórmula tarifaria, de los bonos de treinta años del tesoro de los Estados Unidos de América, más una prima de seis (6) puntos en concepto del riesgo del negocio de transmisión en el país.

Artículo 19. El artículo 101 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 101. Valor agregado de distribución. El valor agregado de distribución está constituido por los siguientes costos que tendría una empresa de distribución eficiente, para prestar el servicio de distribución en su zona de concesión: costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de distribución, excluyendo los costos de medición, facturación y atención a los clientes; el costo de las pérdidas estándar en las redes de distribución; el costo de depreciación de sus bienes; y el costo correspondiente a la oportunidad que debe tener el concesionario de obtener una tasa razonable de

rentabilidad, antes de aplicarse el impuesto sobre la renta, sobre sus inversiones. Para los efectos de este cálculo, no se considerarán los costos financieros de créditos concedidos al concesionario.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecerá un máximo de seis áreas de distribución, representativas de los mercados atendidos en cada zona de concesión; y calculará, luego, el valor agregado de distribución para cada área representativa, bajo el supuesto de eficiencia en la gestión de la empresa de distribución. El supuesto de eficiencia tendrá como base el desempeño reciente de empresas reales similares, nacionales o extranjeras.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos definirá la tasa de rentabilidad que considere razonable para el concesionario, tomando en cuenta la eficiencia de éste. la calidad de su servicio, su programa de inversiones para el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias y cualquier otro factor que considere relevante, que no difiera en más de dos puntos de la suma de la tasa de interés anual efectiva, promedio de los doce meses inmediatos anteriores a la fecha en que se fija la fórmula tarifaria, de los bonos de treinta años del tesoro de los Estados Unidos de América, más una prima de siete (7) puntos en concepto del riesgo del negocio de distribución en el país.

La tasa así determinada se aplicará a los activos fijos netos en operación que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos estime para el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias. Esta estimación se haría a partir del valor, a costo original, asentado en los libros de contabilidad del concesionario, al inicio del periodo, bajo el supuesto de eficiencia económica en las inversiones que el concesionario haga durante el periodo.

Para la determinación del valor agregado de distribución y del ingreso regulado asociado a la actividad de distribución solo se reconocerán activos útiles y efectivamente utilizados para prestar el servicio, inversiones prudentes, costos eficientes de operación, mantenimiento necesario, calidad efectivamente prestada y costos verificables.

Las pérdidas trasladables a los clientes no podrán exceder los niveles eficientes reconocidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Las pérdidas superiores a la meta regulatoria serán asumidas por la empresa distribuidora y no formarán parte del costo reconocido.

La metodología deberá evitar el reconocimiento de inversiones o costos que no produzcan utilidad, capacidad, calidad o continuidad efectiva para la prestación del servicio.

Artículo 20. El artículo 110 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 110. Costo reconocido por compra en bloque. Las compras de electricidad por parte de las empresas distribuidoras deberán garantizar, mediante contratos de suministro, derivados de actos de concurrencia, el servicio a los clientes atendidos directamente por

ellas, por el término y las condiciones que establezca su contrato de concesión o, en su defecto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Las compras de energía realizadas a través de actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía se remunerarán por medio de tarifas que reflejen los costos económicos de suministro y que cubran, en promedio, todos los costos de energía, potencia, servicios especiales y demás cargos en que se incurra por concepto de las compras de energía a empresas generadoras contratadas, según los procedimientos establecidos en el Capítulo IV y VI del Título III de esta ley.

El costo reconocido por las compras para el suministro eléctrico para los clientes finales de las empresas distribuidoras también reconocerá de la misma manera indicada en el párrafo anterior, las compras de las empresas distribuidoras en el mercado ocasional que hayan sido autorizadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

En caso de que la empresa distribuidora contrate el suministro de energía en bloque a través de medios distintos a los actos de compra de potencia y/o energía, autorizados por ley, se le asignará a este contrato, para efectos tarifarios, un costo calculado con base en el precio promedio de las compras de energía través de actos de compra de potencia y/o energía de dicha distribuidora de acuerdo con el procedimiento que autorice la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 21. Se adiciona el numeral 15 al artículo 113 de la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 113. Derechos. Todas las personas, naturales o jurídicas, públicas y privadas, podrán tener acceso al servicio de energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, sus reglamentos, las resoluciones y disposiciones aplicables. Sin perjuicio de lo contemplado en otras disposiciones legales, los clientes de estos servicios tienen derecho a:

...

15. Que se apliquen los créditos en su factura cuando se vea afectado por el incumplimiento en los niveles de calidad establecidos en la normativa vigente, dentro del plazo determinado en la resolución emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, una vez esta haya quedado ejecutoriada.

Artículo 22. El artículo 125 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 125. Obligatoriedad de pago. Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, estará exenta del pago correspondiente por los servicios de electricidad que reciba.

Los clientes que se encuentren al día en el pago del servicio de electricidad conforme a la reglamentación vigente y que presenten reclamos por inconsistencia de facturación o alto consumo podrán abstenerse del pago de la porción en reclamo hasta tanto la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos lo resuelva.

Las empresas distribuidoras dispondrán de un plazo no mayor de quince días **calendario**, contado a partir de la fecha de presentación de un reclamo, para resolverlo. Vencido este plazo sin que la empresa distribuidora resuelva el reclamo, se entenderá a favor del cliente.

Si el cliente no se encuentra satisfecho con la respuesta obtenida de su reclamo ante la empresa distribuidora, cuenta con treinta días calendario para presentar su reclamo ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Artículo 23. Se adicionan los numerales 1 l y 12 al artículo 150 de la Ley 6 de 1997 así:

Artículo 150. Infracciones. Constituyen infracciones a lo establecido en esta Ley, por parte de los prestadores o de los clientes, además de las contempladas expresamente en otras disposiciones de esta Ley, las siguientes:

...

11. Incurrir de forma reiterada en la no entrega de información a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en los tiempos y formas que le sean solicitados.

12. **Incurrir, por parte** del distribuidor del servicio de electricidad, **en cualquiera de** las conductas **expresamente previstas** en la cláusula penal de su contrato de concesión.

Artículo 24. El artículo 151 de la Ley 6 de 1997 queda así:

Artículo 151. Sanciones a los prestadores del servicio. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos impondrá a quienes cometan algunas de las infracciones señaladas en esta Ley o en los Contratos de Concesión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes, según la naturaleza y la gravedad de la falta, las siguientes sanciones:

1. Amonestación

2. Multas de mil balboas (B/.1,000.00) hasta veinte millones de balboas (B/.20,000.000.00).

3. Multas reiterativas de cien balboas (B/.100.00) a diez mil balboas (B/.10, 000.00) por día, cuando no den cumplimiento a una orden impartida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. En este caso la multa se causará por día hasta que se dé cumplimiento a la orden impartida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos fijará el monto de la multa tomando en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, el grado de perturbación y alteración de los servicios, así como, la cuantía del daño o perjuicio ocasionado. La sanción se impondrá sin perjuicio de la resolución administrativa del contrato de concesión o de la cancelación de la licencia, en los casos que esto proceda.

El monto de las multas que se impongan a los prestadores del servicio por la comisión de alguna de las infracciones establecidas en los numerales del 1 al 11 del artículo 150 del Título VII sobre Infracciones, Sanciones y Procedimiento Sancionador, se repartirá en beneficio de los clientes a través de las tarifas en un periodo que no excederá de los sesenta

días calendario. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecerá el procedimiento para hacerlo efectivo.

Las multas **ejecutoriadas** que se impongan a las empresas distribuidoras como consecuencia de las conductas o infracciones descritas en la Cláusula Penal de los Contratos de Concesión serán pagadas al Tesoro Nacional**, en los contratos que la contemplen expresamente.**

Artículo 25. El artículo 30 de la Ley 26 de 1996 queda así:

Artículo 30. Impugnaciones. Las Resoluciones de la Autoridad podrán ser impugnadas por cualquier persona natural o jurídica, o por los órganos competentes del Estado, cuando demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus intereses legítimos o en sus derechos; interponiendo los recursos de reconsideración y/o apelación, según corresponda, ante la propia Autoridad, con lo cual se agotará la vía gubernativa.

Los recursos serán concedidos en efecto suspensivo excepto, cuando correspondan a resoluciones que estén relacionadas al resarcimiento económico por:

a. Una deficiente prestación del servicio;

b. Reducciones tarifarias por calidad de servicio;

c. Por intervención;

Las resoluciones del Administrador, serán únicamente objeto del recurso de reconsideración ante el propio Administrador, luego de lo cual se agotará la vía gubernativa.

Las resoluciones de los Directores Nacionales pueden ser impugnadas mediante los recursos de reconsideración y de apelación. Es potestad del afectado hacer uso directamente del recurso de apelación ante el Administrador, luego de lo cual se agotará la vía gubernativa.

Las resoluciones del Director Ejecutivo únicamente serán objeto del recurso de apelación ante el Administrador, luego de lo cual se agotará la vía gubernativa. La Autoridad tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para decidir el recurso de reconsideración o apelación respectivo. **Si en tal plazo no lo ha resuelto, la decisión se considerará favorable al recurrente.**

Artículo 26. El artículo 32 de la Ley 26 de 1996, queda así:

Artículo 32. Cobro Coactivo. Se confiere a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el ejercicio del cobro coactivo para la ejecución y recuperación de sus créditos **firmes, líquidos, exigibles y determinados**, específicamente los referentes a la Tasa de control, vigilancia y fiscalización, las multas que imponga de conformidad con la presente Ley y las leyes sectoriales, aplicando para ello lo dispuesto en las normas de procesos ejecutivos del Código Judicial. Las certificaciones expedidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sobre el monto de las deudas de los agentes, operadores o concesionarios prestarán mérito ejecutivo. De igual forma prestarán mérito ejecutivo las resoluciones en firme, que impongan las multas pertinentes.

Además, se confiere el ejercicio del cobro coactivo a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en los procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final.

El incumplimiento de lo ordenado mediante resolución ejecutoriada emitida en los procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final generará el recargo que corresponda conforme a la Ley. **Cuando el acto que sirvió de fundamento al cobro sea posteriormente revocado, anulado o dejado sin efecto mediante decisión firme, las sumas cobradas deberán ser restituidas o compensadas al obligado, según corresponda.**

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos designará a un funcionario como Juez Ejecutor, quien deberá ser abogado idóneo y será responsable de adelantar los respectivos procedimientos de cobro coactivo.

Artículo 27. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 6 de 1997, que contendrá todas las reformas que se le han efectuado hasta la fecha, las disposiciones de la presente Ley, así como toda modificación previa a su publicación.

La numeración de los artículos en este texto único iniciará por el artículo 1. Además, para su elaboración, se considerarán los siguientes aspectos:

1. La realización de los ajustes correspondientes a las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas hasta el momento, respecto de la Ley 6 de 1997.

2. La introducción de todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria.

3. La realización de los ajustes formales y estructurales del texto único de la Ley 6 de 1997, de acuerdo con la técnica legislativa, incluyendo el cambio de Ente Regulador por Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

4. Una vez elaborado el Texto Único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la Gaceta Oficial.

Artículo 28. La presente Ley modifica los artículos 6, 12, 48,49, **51**, 57, 59, 78, 80, 82, 83, 85, 98, 99,101,110,113,125,150 y 151 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, modifica los artículos 30 y 32 del Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996 y adiciona los artículos 4-A, 48-A, **50-A** y 86-A al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997.

Artículo 29. Esta Ley entrará **a regir** el día siguiente **al** de su promulgación, **salvo los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 6, y los artículos 11, 12 que entrarán a regir el 22 de octubre de 2028.**

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, como fue aprobado en Primer Debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, en sesión de 6 de octubre de 2026.

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS

HD. JAMIS G. ACOSTA G.

Presidente

HD. NÉSTOR A. GUARDIA J.

Vicepresidente

HD. JULIO DE LA GUARDIA A.

Secretario

HD. ARIEL VALLARINO A.

Comisionado

HD. JOSÉ LUIS VARELA R.

Comisionado

HD. CRISPIANO ADAMES N.

Comisionado

HD. JORGE GONZÁLEZ L.

Comisionado

Abstenemos

HD. YAMIRELIZ CHONG S.

Comisionada

Me Abstengo

HD. JOSÉ PÉREZ BARBONI

Comisionado

Pérez Barboni
ME ABSTENGO